

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/Q4/SVK/1

5 de mayo de 1999

(99-1808)

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio**

Original: inglés

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LA OBSERVANCIA

REPÚBLICA ESLOVACA¹

En el presente documento se reproduce la declaración introductoria realizada por la delegación de la República Eslovaca, las preguntas que se le han formulado y las respuestas facilitadas en relación con el examen de la legislación sobre la observancia en la reunión del Consejo del 17 al 21 de noviembre de 1997.²

I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA

Desearía hacer unas cuantas observaciones generales sobre el tema de la legislación relativa a la observancia, que figura en el actual orden del día.

Para empezar, permítanme destacar que el párrafo 3 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC es aplicable a la República Eslovaca. Sin embargo, la República Eslovaca, cuya legislación en materia de propiedad intelectual está casi toda ella en conformidad con los artículos correspondientes del Acuerdo sobre los ADPIC, ha notificado esa legislación debidamente revisada, con la excepción de la legislación sobre derecho de autor. Además, se han facilitado, y distribuido posteriormente en el documento IP/N/6/SVK/1 de la OMC, sus respuestas a la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

La República Eslovaca concede gran importancia a la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, la mayoría de cuyos artículos se aplican total o parcialmente a través de la legislación nacional y, como se refleja en las respuestas distribuidas, presta gran atención a la mejora de los elementos aún incompletos. Es el caso de la Ley de Derecho de Autor, que ha sido aprobada por los comités pertinentes del Parlamento y cuya adopción definitiva tendrá lugar el presente año. La nueva codificación del derecho penal y del Código de Procedimiento Civil se halla en sus fases finales, y se está examinando una legislación específica sobre medidas en frontera.

Permítanme entrar en la cuestión de fondo del presente examen, centrado en la observancia. La República Eslovaca ha facilitado información detallada relativa a su legislación sobre la observancia, que figura en el documento IP/N/6/SVK/1 de la OMC.

¹En cuanto a las leyes y reglamentos relativos a la materia de examen y notificados por la República Eslovaca en virtud del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, véanse los documentos IP/N/1/SVK/1/Rev.1 (anexo II) e IP/N/6/SVK/1.

²El acta de la reunión se distribuyó como documento IP/C/M/16.

A ese respecto, hemos recibido 94 preguntas escritas de las delegaciones de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, de los Estados Unidos y del Japón. Las repuestas por escrito están disponibles en la Sala. Hemos puesto todo nuestro empeño en dar la respuesta adecuada a las preocupaciones de nuestros interlocutores.

Las preguntas formuladas abarcan un amplio marco de relaciones jurídicas. A nuestro juicio, las cuestiones más importantes son las relativas al procedimiento de observancia por vía judicial establecido en el Código de Procedimiento Civil, Ley N° 99/1963 con sus modificaciones, y al procedimiento de observancia por vía administrativa, en general contenido en el Código de Procedimiento Administrativo, Ley N° 71/1967, con inclusión de las medidas en frontera, la Ley de Aduanas N° 180/1996 y otros reglamentos especializados.

Otro ámbito de interés es la protección de la información confidencial, prevista en varias leyes especiales, y la relación entre los tratados internacionales y la legislación nacional, que en términos generales se rige por el artículo 11 y el párrafo e) del artículo 125 de la Constitución de la República Eslovaca y por la Ley N° 1/1993 del Código de Leyes.

Esperamos que las repuestas facilitadas constituyan una base suficiente que permita a nuestros interlocutores evaluar nuestro actual marco legislativo en la materia sometida a examen. Asimismo, atenderemos las preguntas complementarias, si las hubiere, y agradeceremos la presentación de posibles preguntas por escrito.

II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS

1. Según la Constitución de la República Eslovaca, los convenios internacionales ratificados por la República Eslovaca y publicados de conformidad con los procedimientos aplicables son parte del derecho interno de la República Eslovaca y tienen precedencia sobre éste en cualquier caso de contradicción. Puede decirse por consiguiente que tales convenios internacionales ratificados y publicados son un complemento de la legislación eslovaca en los casos en que no haya contradicción entre aquéllos y ésta. Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros entienden que los acuerdos sobre los ADPIC no se han publicado todavía en la República Eslovaca conforme a las prescripciones constitucionales pertinentes. Sírvanse explicar.

En primer lugar, es necesario responder a la parte de la pregunta 1 relativa a la precedencia de los convenios internacionales ratificados y publicados sobre el derecho interno eslovaco en caso de contradicción. A ese respecto, es preciso destacar que, de conformidad con el artículo 11 de la Constitución de la República Eslovaca, sólo los convenios relativos a la protección de los derechos humanos tienen precedencia directa sobre la legislación, de forma que en los casos en que un convenio internacional reconozca ese tipo de derechos con mayor amplitud que la legislación nacional, y también en los casos en que exista contradicción directa entre un convenio y la legislación, los tribunales pueden aplicar directamente el convenio internacional. Con arreglo al párrafo e) del artículo 125 de la Constitución de la República Eslovaca, otros convenios internacionales tendrán también precedencia cuando el Tribunal Constitucional dicte sentencias relativas a la conformidad de las normas jurídicas de carácter generalmente vinculante con los convenios internacionales proclamados en la forma prevista para la promulgación de las leyes. Si el Tribunal Constitucional dicta sentencia respecto a la no conformidad de la ley con un convenio internacional, esa ley, o su parte correspondiente, quedan sin efecto al cabo de seis meses, salvo que en ese intervalo hayan sido modificadas por el Parlamento de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional. Como resultado de lo expuesto, cualquier convenio internacional distinto de los relativos a derechos humanos tiene precedencia sobre el derecho interno, pero esa precedencia no puede aplicarse

directamente, sino sólo después de que el proceso mencionado se haya llevado a término en el Tribunal Constitucional.

En diciembre de 1995, el Parlamento ratificó, como parte del Acta Final, el Acuerdo sobre los ADPIC, que entró en vigor el día de su aprobación. A partir de esa fecha, las disposiciones del Acuerdo se incorporaron a la legislación nacional (por ejemplo, la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio). El Acuerdo sobre los ADPIC traducido al eslovaco se encuentra a disposición de todos los órganos administrativos interesados y del sector privado a través de diversas publicaciones. En un futuro próximo está previsto publicar oficialmente la traducción de ese Acuerdo, aunque se considera que tal publicación es una cuestión estrictamente técnica.

2. ¿En qué situación se encuentran la recodificación por la República Eslovaca de la Ley N° 99/1963 sobre Procedimiento Civil (llamada a continuación "Código eslovaco de Procedimiento Civil") y de la Ley N° 392/1992 de Derecho Penal? ¿Cómo aplica la nueva legislación la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC?

La recodificación del Código de Procedimiento Civil o vigente Ley N° 99/1963, con sus modificaciones, se halla en sus fases finales. En el momento actual, las instituciones de expertos recomendadas por la Comisión Europea han finalizado ya el examen de las modificaciones propuestas. Las recomendaciones no han sido aún analizadas a fondo por el Ministerio de Justicia, ya que se están traduciendo al eslovaco. En general, puede afirmarse que el Código eslovaco de Procedimiento Civil, especialmente tras su modificación en 1992, cumple los criterios establecidos en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. Es necesario destacar que, en rigor, las medidas legislativas no pueden tener incidencia en la duración de los procedimientos judiciales que, a raíz de los cambios introducidos en el sistema político, resultan excesivamente prolongados, especialmente en lo que respecta a las cuestiones comerciales. Las mejoras en esa materia dependen sobre todo de la consolidación de la situación económica y, en parte, de las condiciones políticas de la sociedad. En cuanto a la perspectiva cronológica de la recodificación del Código de Procedimiento Civil, según la información facilitada por el Ministerio de Justicia, lo previsto es que la propuesta se someta a la fase final del proceso legislativo en el Parlamento durante 1998. En cuanto a la recodificación de la Ley de Derecho Penal y del Código Penal, los trabajos legislativos se hallan en una etapa más avanzada y se prevé que el inicio de la fase final del proceso legislativo en el Parlamento se lleve a cabo durante el presente año.

De conformidad con la Ley de Derecho Penal, el tribunal que dicte sentencia para castigar un acto delictivo con arreglo a los artículos 150 y 151 de esa Ley (relativos a la protección de los derechos de propiedad industrial, que también afecta al derecho de autor y a los derechos conexos) podrá imponer el decomiso de un objeto o, en fases previas, la confiscación de los objetos destinados a perpetrar un acto delictivo, con lo que el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC puede aplicarse hasta cierto punto.

3. ¿Prescriben las leyes de la República Eslovaca procedimientos relativos a la observancia como los especificados en el Acuerdo sobre los ADPIC que permitan la adopción de medidas eficaces sin retrasos injustificables, conforme a los párrafos 1 y 2 del artículo 41 del Acuerdo? Sírvanse explicar.

La Oficina de la Propiedad Industrial de la República Eslovaca y los tribunales ordinarios, en el marco de sus competencias, garantizan y ejecutan los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad industrial. Asimismo, es competencia del Tribunal de Apelación (Tribunal Superior) el examen de las decisiones adoptadas por la Oficina de la Propiedad Industrial como órgano central de la administración del Estado.

En general, las actuaciones ante la Oficina son asequibles, tanto desde el punto de vista de la tramitación, ya que no se imponen requisitos especiales para la comunicación con la Oficina, como en cuanto a su naturaleza. En sus actuaciones, la Oficina da prioridad a las cuestiones relacionadas con las diferencias de las partes en acciones judiciales o las solicitudes internacionales relativas a marcas de fábrica o de comercio. El mismo criterio se aplica en caso de actuaciones ante los tribunales, cuando la posibilidad de que no se cumpla el plazo establecido o se produzcan retrasos innecesarios pueda resolverse mediante la solicitud de medidas provisionales, que el tribunal ordena, en virtud del párrafo 2 del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, dentro de los 30 días siguientes al de la solicitud de la medida provisional. La observancia de los derechos mediante los procedimientos expuestos ha de estar en conformidad con las buenas costumbres o las prácticas comerciales leales.

La modificación establecida por los artículos 3 a 10 de la Ley N° 188/1994 sobre Protección de la Competencia Económica tiene como objeto impedir la creación de obstáculos al comercio legal, así como la violación de los derechos correspondientes, y su aplicación es competencia de la Oficina Antimonopolio de la República Eslovaca.

4. Sírvanse explicar si la ley eslovaca faculta, y de qué manera, a las autoridades judiciales competentes para ordenar la aportación de una prueba por una parte contraria, con sujeción a condiciones que garanticen la información de la protección confidencial en los casos procedentes, conforme al párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC.

De no ser así, ¿se propone el Gobierno de la República Eslovaca incluir tal disposición en la recodificación del Código eslovaco de Procedimiento Civil?

Los tribunales pueden ordenar a cualquiera, incluidas las partes en las actuaciones, la aportación de un documento o un objeto como prueba (párrafo 2 del artículo 129 del Código de Procedimiento Civil). Asimismo, los tribunales pueden ordenar el examen de un objeto en el lugar en que esté depositado (artículo 130), y oír a las partes en las actuaciones como testigos (artículo 131). El desacato de los mandamientos judiciales puede sancionarse mediante la imposición repetida de un castigo.

De acuerdo con los artículos 35, 37 y 38 de la Ley sobre Procedimiento Civil, una autoridad administrativa posee también facultades similares.

El examen de las pruebas aportadas depende de la decisión discrecional del tribunal. En los casos en que el demandante carezca parcialmente de pruebas, el tribunal podrá tener en cuenta esa circunstancia y, en beneficio de aquél, examinar pruebas indirectas y, en casos extremos, tener también en cuenta la honradez de la parte en las actuaciones y fallar a favor del demandante, pero sólo si la parte contraria no refuta las pruebas por él aportadas. En determinados casos, la ley resuelve la supuesta falta de pruebas de la parte perjudicada mediante presunciones sólo de derecho, como por ejemplo las establecidas por el derecho de patentes en el párrafo 2 del artículo 13 de la Ley N° 527/1990 en los términos siguientes: "Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, los derechos relativos a esa patente se extenderán a los productos obtenidos directamente por medio del procedimiento patentado y, salvo que existan pruebas en contra, los productos idénticos se considerarán obtenidos mediante el procedimiento protegido." En tal caso, el tribunal puede ordenar a cualquier persona que presente documentos u objetos o requerir a esa persona para que declare como testigo en relación con los datos presentados por una parte en las actuaciones si esa parte no es capaz de aportar pruebas.

La protección de los secretos oficiales (del Estado) y profesionales se estipula en la Ley N° 100/1996. Según su artículo 3, por secreto profesional se entiende la información o los objetos relacionados con la actividad de un órgano del Estado, comunidad u otra persona jurídica que figuren en la lista de datos constituyentes de secreto profesional de un órgano

central o comunidad que, a causa de su importancia, hayan de protegerse contra la divulgación, la utilización indebida, el daño, la destrucción, la pérdida o el robo.

Cada órgano del Estado elabora una lista de secretos oficiales cuyas condiciones de divulgación y depósito se publican en el Boletín Oficial. En el caso de la Oficina de la Propiedad Industrial, se consideran materia de sus secretos oficiales las invenciones, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales y las topografías de productos semiconductores cuando un solicitante o un titular de derechos piden que se respete la confidencialidad.

En tales casos, el trato otorgado al material documental y el acceso a él están sujetos a un régimen de protección especial de acuerdo con la Ley. El mismo procedimiento se aplica en las acciones judiciales.

Otra categoría la constituyen los secretos comerciales, entre los que deben incluirse los secretos de producción. Su protección se establece en el Código de Comercio o Ley N° 513/1991, en cuyo artículo 17 se definen los secretos comerciales del modo siguiente:

"Asimismo, es secreto comercial la materia de los derechos de que es titular una empresa. Constituyen secretos comerciales todos los datos de carácter comercial, productivo o técnico relacionados con una empresa que tengan valor material o inmaterial real o, al menos, potencial, y no sean, en general, accesibles a los círculos comerciales, y deberán ser oficialmente secretos cuando un empresario lo desee y él mismo garantice su confidencialidad de forma adecuada."

En el artículo 20 se establece lo siguiente:

"El empresario tiene derecho a protección legal frente a la violación o amenaza de violación del derecho al secreto comercial, así como frente a la competencia desleal."

La violación del secreto comercial se define en el artículo 51 de la forma siguiente:

"Constituye violación del secreto comercial la acción por la que una persona da a conocer, revela a otra persona o utiliza en beneficio propio o de terceros un secreto comercial (artículo 17) susceptible de ser utilizado en competencia y sobre el que haya obtenido conocimientos de la forma siguiente:

- a) el secreto fue confiado a esa persona o llegó a su conocimiento de alguna otra forma (por ejemplo, a través de documentos técnicos, instrucciones, ilustraciones, modelos o dibujos) basada en una relación de empleo o de cualquier otro tipo con su competidor o en la ejecución de funciones encomendadas por los tribunales u otros órganos,
- b) mediante acciones propias o ajenas contrarias a la ley."

Según el texto citado de los párrafos a) y b) del artículo 51, las obligaciones de terceros en materia de secretos comerciales son manifiestas, aunque muy generales.

A los efectos de las actuaciones que deban llevarse a cabo ante la Oficina Antimonopolio, en los artículos 15 y 16 de la Ley sobre Protección de la Competencia Económica N° 188/1994 se definen las obligaciones de los terceros. En el artículo 15 se dispone lo siguiente: "Las empresas están obligadas a presentar a la Oficina los documentos y la información requeridos, permitir el examen de esos documentos e información y franquear al personal de la Oficina el acceso a todos los objetos, instalaciones y medios de transporte de las empresas."

En el artículo 16 se establece lo siguiente:

- 1) "Los documentos y la información facilitados a la Oficina por las empresas de la administración estatal y local sólo se utilizarán con los fines para los que se solicitaron."
- 2) "El personal de la Oficina, así como las personas que desempeñen funciones por cuenta de ella, están obligados a respetar la confidencialidad de la información que constituya secreto comercial y que haya llegado a su conocimiento en el desempeño de las funciones mencionadas."

La última categoría comprende la información confidencial, es decir, los datos que no reúnen las condiciones de secreto oficial, profesional o comercial, pero respecto de los cuales existen motivos racional y socialmente aceptables para mantener su confidencialidad. En general, esa categoría no está sujeta a una ley específica. Sin embargo, algunas normas de procedimiento regulan las obligaciones de terceros (especialmente de las autoridades estatales) respecto de la información confidencial.

Esas normas son los artículos 44 y 124 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 23 de la Ley sobre Procedimiento Civil N° 71/1967, el artículo 4 del Decreto del Ministerio de Justicia N° 66/1992 sobre normas de procedimiento de los tribunales de distrito y regionales.

5. Sírvanse explicar si la ley eslovaca faculta, y de qué manera, a las autoridades judiciales competentes para formular determinaciones preliminares y definitivas sobre la base de la información que les haya sido presentada en caso de que una de las partes en un procedimiento deniegue voluntariamente y sin motivos sólidos el acceso a información necesaria o de otro modo no facilite tal información u obstaculice de manera sustancial un procedimiento relativo a una medida adoptada para asegurar la observancia de un derecho, conforme al párrafo 2 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC.

De no ser así, ¿se propone el Gobierno de la República Eslovaca incluir tal disposición en la recodificación del Código eslovaco de Procedimiento Civil?

La pregunta se ha respondido parcialmente en la respuesta a la pregunta 3. Sobre la base de la propuesta de una parte, el tribunal puede ordenar la adopción de medidas preliminares en casos en que las declaraciones de una parte respecto de la información presentada parezcan fiables, sin que sea necesario oír a la parte contraria. En principio, el tribunal brinda a la parte contraria la oportunidad de exponer su opinión respecto a la solicitud de medidas preliminares cuya vigencia sea temporal o esté limitada por un fallo definitivo. Las partes en el procedimiento están obligadas a comparecer ante el tribunal en persona o a través de un representante, bajo pena de multa o conducción ante el tribunal por la policía. Esta pregunta se ha respondido también parcialmente en la respuesta a la pregunta 4.

En cuanto al cumplimiento del Acuerdo sobre los ADPIC, es importante el párrafo 1 del artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, en virtud del cual el tribunal puede imponer a una parte, mediante la adopción de una medida preliminar, la obligación de abstenerse de utilizar, administrar o manipular objetos o derechos, hacer algo o abstenerse de hacerlo o tolerarlo, depositar en el tribunal una cantidad en metálico o un objeto, etc.

6. Sírvanse explicar si la ley eslovaca faculta, y de qué manera, a las autoridades judiciales competentes para ordenar, conforme al artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, que sean apartadas de los circuitos comerciales sin indemnización alguna:

- a) las mercancías que a su juicio sean infractoras; y/o

- b) **los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores.**

Sírvanse explicar también si la ley eslovaca faculta, y de qué manera, a las autoridades judiciales competentes para ordenar, conforme al artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, la destrucción de las mercancías infractoras. De no ser así, ¿se propone el Gobierno de la República Eslovaca incluir tal disposición en la recodificación del Código eslovaco de Procedimiento Civil?

De acuerdo con el párrafo 1 del artículo 26 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio N° 55/1997, el titular de una marca de fábrica o de comercio puede pedir a toda persona que se abstenga de utilizar su marca o un signo similar a ella susceptible de crear confusión en relación con bienes o servicios idénticos o similares, y puede solicitar que los artículos marcados de ese modo se retiren del mercado.

Derechos similares se reconocen, *mutatis mutandi*, a los titulares de otros contenidos de propiedad industrial. Los tribunales pueden prohibir la utilización de marcas idénticas o marcas similares susceptibles de crear confusión en relación con bienes o servicios idénticos o similares (excepción hecha de las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas) y ordenar la retirada de tales bienes de los circuitos comerciales. Actualmente se examina la compatibilidad de las disposiciones que permiten ordenar la destrucción de mercancías infractoras con la Constitución. En el momento presente, tal procedimiento sólo es posible en casos en que se establezca que se ha cometido un delito, tras lo cual, como ya se ha expuesto, un órgano competente en procedimientos penales puede adoptar una decisión respecto a la confiscación de un objeto que sirva para cometer actos delictivos, y el tribunal puede ordenar, entre otras cosas, el decomiso de objetos. A ese respecto, se prevé introducir la modificación correspondiente en la recodificación de la Ley de Aduanas, especialmente en relación con la protección frente a las mercancías infractoras en la frontera.

[Pregunta complementaria de las CE]

Sírvanse indicar cuándo tendrá lugar la recodificación de la Ley de Aduanas.

Se prevé que la preparación de la normativa especial sobre medidas en frontera relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual empiece en 1998, con el objetivo de finalizar el procedimiento legislativo y adoptar la ley correspondiente al año siguiente.

7. Sírvanse explicar si la ley eslovaca faculta a las autoridades judiciales competentes para ordenar a un infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución, conforme al artículo 47 del Acuerdo sobre los ADPIC. De no ser así, ¿se incluirá una disposición de este tipo en la recodificación del Código eslovaco de Procedimiento Civil?

El derecho de información previsto en el artículo 47 del Acuerdo sobre los ADPIC se reconoce al titular del derecho en los párrafos 2) y 3) del artículo 25 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio N° 55/1997, en virtud de los cuales el titular del derecho puede solicitar la información mencionada a través del tribunal.

[Preguntas complementarias de las CE]

¿Podría el Gobierno de la República Eslovaca aclarar si la competencia de las autoridades judiciales pertinentes para ordenar a un infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes y servicios infractores y sobre sus circuitos de distribución se limita al ámbito de las marcas? En caso afirmativo, ¿tiene previsto el Gobierno de la República Eslovaca hacer extensiva esa competencia a otros sectores de la propiedad intelectual?

El derecho de información conforme al artículo 47 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece únicamente en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio N° 55/1997. Pero, habida cuenta de las previsiones de recodificación total de la legislación relativa a la protección de los derechos de propiedad industrial (como parte del proceso de aproximación legislativa), esa competencia se extenderá también a otros sectores de la propiedad intelectual.

¿Podría la República Eslovaca exponer más detalladamente las medidas que piensa adoptar para poner su legislación en conformidad con los artículos 52 a 57 y 59 del Acuerdo sobre los ADPIC?

Véase la respuesta a la pregunta complementaria de la pregunta 6.

8. ¿Prescribe la ley eslovaca un procedimiento para que el titular de un derecho pueda solicitar la suspensión por las autoridades de aduanas del despacho para la libre circulación de mercancías sospechosas de tener marcas de fábrica o de comercio falsificadas o de ser mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, conforme al artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC? De ser así, ¿es conforme ese procedimiento a las disposiciones de los artículos 52 a 57 y 59 del Acuerdo sobre los ADPIC? Sírvanse explicar.

Actualmente, la normativa sobre marcas de fábrica o de comercio y aduanas no permite al titular del derecho solicitar oficialmente la intervención de las autoridades aduaneras en las cuestiones de imitación o falsificación de productos amparados por marcas de fábrica o de comercio o por el derecho de autor. Según el artículo 60 de la Ley de Aduanas N° 180/1996, las autoridades aduaneras están obligadas a tener presentes, en la tramitación de las formalidades de aduana, las prohibiciones y restricciones relacionadas con la protección de la propiedad intelectual. El titular del derecho puede emprender acciones para suspender el despacho de mercancías en la frontera y, en lo que respecta a su derecho, las autoridades aduaneras están obligadas a respetarlo. Sin embargo, esa modificación no es suficiente, ya que el titular del derecho no pasa a ser parte en un procedimiento a través de esa acción ni tiene los derechos procesales que tendría si fuese parte en un procedimiento. Por otra parte, no se puede exigir una garantía financiera en los casos en que se determine que la retención de las mercancías ha sido injustificada y haya causado daño o pérdidas materiales. La legislación modificada vigente no cumple las disposiciones de los artículos 52 a 57 y 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, por lo que se está examinando una nueva legislación específica sobre medidas en frontera en que se tienen en cuenta, entre otras cosas, esas disposiciones.

9. ¿Dispone la ley eslovaca que las autoridades competentes actúen por propia iniciativa y suspendan el despacho de las mercancías conforme al artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC? De ser así, ¿es conforme también la ley eslovaca con las disposiciones de los apartados a) a c) del artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC? Sírvanse explicar.

La repuesta a esta pregunta figura en parte en la respuesta a la pregunta 8, que presupone que la administración de aduanas, si de alguna forma tiene conocimiento de que las mercancías sujetas a despacho de aduana infringen un derecho de propiedad intelectual, está obligada a tener en cuenta esa

circunstancia y actuar en consecuencia. En general, el resultado es la suspensión del despacho de las mercancías para libre circulación.

10. Respecto a los casos de infracción de la propiedad intelectual, se invita al Gobierno de la República Eslovaca a facilitar datos sobre el número de:

- procedimientos incoados, con sus resultados respectivos y duración media del procedimiento desde la presentación de la denuncia hasta la sentencia final;
- mandamientos judiciales dictados (tal como los define el artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC), con explicación de cómo se ejecutan tales mandamientos;
- medidas provisionales (como las que define el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC) que se han concedido y plazo medio para la obtención de las mismas (desde la solicitud);
- suspensiones en la frontera de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o piratas, o en relación con mercancías que infrinjan otros derechos de propiedad intelectual;
- casos penales, con las sentencias aplicadas; indicación de si han sido ejecutadas; sírvanse explicar también qué tipo de infracciones de un derecho de propiedad intelectual se considerarían delitos;
- decomisos y/o destrucción de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y mercancías pirata que lesionen el derecho de autor.

Se ruega además al Gobierno de la República Eslovaca que explique y dé ejemplos prácticos de:

- cómo se calcula la compensación del daño por infracción de los derechos de propiedad intelectual (artículo 45, párrafo 1, del Acuerdo sobre los ADPIC);
- cuáles serían los "gastos del titular del derecho" que deberían pagarse según el párrafo 2 del artículo 45, primera parte de la primera frase, del Acuerdo sobre los ADPIC, y cómo se calcularían;
- si son reembolsables los honorarios de los abogados y cómo se calcularían tales honorarios;
- si se ha aplicado en la República Eslovaca la segunda frase del párrafo 2 del artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC, y cómo se calcularían tales "perjuicios".

La Oficina no dispone directamente de los datos estadísticos requeridos, por lo que ha solicitado al Ministerio de Justicia y a la Administración Central de Aduanas la información mencionada.

Para responder a la pregunta relativa a los aspectos penales de la protección de la propiedad intelectual quizás sea preferible citar las disposiciones concretas de los artículos 150 a 152 del Código de Procedimiento Penal.

Artículo 150 - Infracción de los derechos relativos a marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales y denominaciones de origen protegidas

- 1) La persona que haya puesto en el mercado productos o prestado servicios al amparo de una marca idéntica a una marca de fábrica o de comercio cuya titularidad exclusiva corresponda a otra persona, o un signo susceptible de crear confusión por su similitud con esa marca de fábrica o de comercio, será sancionada con pena de prisión durante un período de un año, multa o decomiso del objeto.
- 2) El mismo castigo se impondrá a la persona que, para lograr un beneficio económico:
 - a) use ilícitamente un nombre comercial o cualquier signo similar a ese nombre susceptible de crear confusión, o
 - b) ponga en circulación productos ilícitamente marcados con una denominación de origen cuya titularidad exclusiva corresponda a otra persona, o con una denominación de origen similar susceptible de crear confusión.

Artículo 151 - Infracción de derechos de propiedad industrial

La persona que infrinja ilícitamente el derecho relativo a una invención, un dibujo o modelo industrial, un modelo de utilidad o una topografía de producto semiconductor protegidos será castigada con pena de prisión por un período no superior a tres años o una multa.

Artículo 152 - Infracción del derecho de autor

- 1) La persona que se beneficie ilícitamente de una obra protegida por el derecho de autor, de una interpretación o ejecución de un artista intérprete o ejecutante, de una grabación sonora o visual, de un programa de radiodifusión o de televisión protegido por un derecho similar al derecho de autor en cuanto a su pertenencia al autor, artista intérprete o ejecutante, productor de la grabación sonora o visual, organismo de radiodifusión o televisión u otro titular de ese derecho, o la persona que de alguna otra forma infrinja los derechos mencionados, serán castigadas con pena de prisión por un período no superior a dos años, con multa o con el decomiso del objeto.
- 2) El infractor será castigado con pena de prisión de seis meses a cinco años o con multa o decomiso del objeto si:
 - a) obtiene beneficios considerables mediante la acción expuesta en el párrafo 1, o
 - b) comete una infracción de gran alcance.

Cabe subrayar que es facultad discrecional del juez y, previamente, del fiscal determinar la intensidad de las acciones ilícitas que examinen y establecer de ese modo la existencia de un acto delictivo. En lo que respecta al artículo 150, la condición para su aplicación es el despacho de las mercancías a libre práctica o la prestación de un servicio con utilización ilícita directa de un signo protegido. En la República Eslovaca no se ha adquirido aún una experiencia que pueda servir para establecer pautas generales, sobre todo por parte del poder judicial.

Segunda parte

En todo caso, corresponde al demandante determinar el importe del daño. Si ese importe se justifica y prueba adecuada y fehacientemente, el tribunal tendrá motivos para pronunciarse sobre la demanda de indemnización por daños y perjuicios. En los casos en que el titular del derecho sufra pérdidas materiales que no tengan el carácter de daños y perjuicios desde el punto de vista jurídico, por no estar causadas por una acción ilegal, o en caso de que se produzcan pérdidas no materiales, el tribunal puede reconocer a la parte perjudicada el derecho al resarcimiento adecuado, incluso en forma de compensaciones pecuniarias. En tal caso, el juez fija discrecionalmente la cantidad de dinero por concepto de resarcimiento, que evidentemente se basa en la solicitud formulada y, aunque no se trata de un importe establecido objetivamente, sino determinado de forma discrecional, ha de tener una base racional.

Consideramos que la información expuesta responde a la pregunta sobre los eventuales gastos del titular del derecho que deberían pagarse según el párrafo 1 del artículo 45.

La parte ganadora o parcialmente ganadora de un pleito puede obtener el derecho al resarcimiento de las costas del procedimiento en la medida en que la sentencia le sea favorable. Esas costas se consideran aparte de los honorarios de asesoramiento jurídico, de los abogados y de otros honorarios cuyo pago demostrable y justificado guarde relación con la ejecución del derecho por vía judicial. El reembolso de los honorarios de los abogados se calcula objetivamente de acuerdo con las tarifas establecidas mediante el decreto del Ministerio de Justicia en que se determina la remuneración de los abogados por los distintos actos, en función de su naturaleza y su número y del importe de la reclamación.

En cuanto a la aplicación de la segunda frase del párrafo 2 del artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC, consideramos que se lleva a cabo en virtud el párrafo 3) del artículo 26 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio N° 55/1997, que establece el derecho al resarcimiento por perjuicios o a la indemnización pertinente, que puede también consistir en una compensación pecuniaria con independencia de que el infractor haya violado los derechos del titular y causado, a sabiendas o no, perjuicios u otras pérdidas.

Procedimientos penales

Disposición aplicable	Número definitivo de personas condenadas		
	1994	1995	1996
Párrafo 2 del artículo 150	0	0	0
Artículo 151	1	1	2
Artículo 152	22	28	25

Estadísticas relativas a acciones civiles

Caso	Año	Número definitivo de casos resueltos	Promedio de la duración de los procedimientos, en meses
Infracción del derecho de autor	1994	43	7,9
	1995	29	9,8
	1996	10	10,2
Otros casos relativos al derecho de autor	1994	140	8,0
	1995	93	8,1
	1996	28	12,3
Derechos de inventores	1994	7	17,1
	1995	4	21,0
	1996	9	19,7
Derechos relativos a propuestas de racionalización y a dibujos y modelos industriales	1994	41	19,3
	1995	38	21,1
	1996	15	21,9

III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN

1. Sírvanse explicar cuáles son las "autoridades competentes" estipuladas en el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Las "*autoridades competentes*" a que se refiere el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC son una Oficina de Aduanas subordinada a la Dirección de Aduanas de la República Eslovaca, ubicada en Bratislava.

2. Sírvanse explicar si el "procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión", previsto en el artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC, es judicial o administrativo.

El procedimiento previsto en el artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC es un procedimiento administrativo llevado a cabo por las autoridades aduaneras. Es necesario indicar que el actual ordenamiento jurídico de la República Eslovaca (Ley N° 180/1996) no comprende disposición especial alguna sobre los plazos para emprender acciones judiciales en ese contexto.

3. ¿Existe algún medio, además de la demanda prevista en los artículos 51 y 52 del Acuerdo sobre los ADPIC (a la que se hará referencia en adelante como "demanda"), por el que un titular de derechos pueda solicitar a las autoridades competentes que suspendan el despacho de mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual, o de las que se sospeche que los infringen?

Según el artículo 60 de la Ley N° 180/1996, las autoridades aduaneras están obligadas a observar otros derechos al despachar las mercancías, en particular los derechos de propiedad intelectual. El titular del derecho no tiene posibilidad de presentar una solicitud formal en virtud de la cual la autoridad administrativa (la administración de aduanas) deba incoar un procedimiento, sino únicamente una petición en virtud de la cual el órgano administrativo puede intervenir de oficio si considera que tal petición está justificada.

4. Sírvanse explicar cuál considera su país el "plazo razonable" dentro del cual las autoridades competentes "comunicarán al demandante ... si han aceptado la demanda", conforme a lo estipulado en el artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Son aplicables los plazos generales de adopción de decisiones previstos en el artículo 49 de la Ley N° 71/1967. Cuando se trate de cuestiones sencillas, la autoridad administrativa deberá tomar una decisión inmediatamente o en el plazo de 30 días. En los casos difíciles, el plazo establecido se amplía a 60 días, prorrogables por la autoridad de apelación. Si el plazo se prorroga durante 60 días o más, el participante en el procedimiento deberá ser informado al respecto.

5. Sírvanse explicar cuál es el plazo de vigencia de las demandas.

Esta disposición no es aplicable a nuestro ordenamiento jurídico, ya que cada caso debe ser resuelto oficialmente.

6. Sírvanse explicar si el titular de derechos está obligado a pagar algún gravamen para poder presentar la demanda.

La petición que no se formule como propuesta en regla de incoación de un procedimiento no está sujeta a pago alguno (véase la respuesta a la pregunta 3).

7. Sírvanse indicar las disposiciones de las leyes y ordenanzas que establecen el "procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto", estipulado en el artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC; y resumir el contenido de esas disposiciones.

La legislación eslovaca vigente no prevé ese procedimiento, aunque se está examinando la posibilidad de introducir una normativa específica.

8. Sírvanse explicar qué procedimiento especial corresponde aplicar, en caso de que exista alguno, cuando no resulta evidente si las mercancías infringen o no derechos de propiedad intelectual, en los casos del artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Como ya se ha indicado, no existe un procedimiento judicial especial. Si la infracción de los derechos no resulta evidente, las autoridades aduaneras solicitarán el dictamen de la Oficina de la Propiedad Industrial.

9. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando omiten suspender el despacho para libre circulación de mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual, en relación con la suspensión basada en una demanda o con la actuación de oficio prevista en el artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En caso de que las autoridades aduaneras no cumplan la obligación establecida en el artículo 60 de la Ley N° 180/1996 (véase la respuesta a la pregunta 3) aunque hayan tenido conocimiento de la infracción del derecho de propiedad intelectual o debieran haberlo tenido en las circunstancias concurrentes y, en consecuencia, se haya producido perjuicio, el Estado será responsable del perjuicio causado por la aplicación de procedimientos administrativos inadecuados, como se establece en los artículos 18 y siguientes de la Ley N° 58/1969 (Ley sobre la responsabilidad por el daño resultante de una decisión de las autoridades del Estado o de la aplicación de procedimientos administrativos inadecuados).

10. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando examinan mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual y a pesar de ello las despachan para libre circulación, en relación con la suspensión basada en una demanda o con la actuación de oficio prevista en el artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Véase la respuesta a la pregunta 9. Es necesario añadir que la condición previa para incurrir en responsabilidad es la existencia de daño en forma de pérdida de la propiedad que pueda expresarse objetivamente en términos monetarios. Junto con los daños y perjuicios, la parte puede reclamar también la pérdida de beneficios.

11. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando suspenden el despacho para libre circulación de mercancías que no infringen derechos de propiedad intelectual, en relación con la suspensión basada en una demanda o con la actuación de oficio prevista en el artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.

También en este caso las responsabilidades pueden considerarse en el sentido expresado en la respuesta a la pregunta 9, siempre que sea posible alegar y demostrar que se ha aplicado un procedimiento administrativo incorrecto, que se ha producido perjuicio y que existe un nexo causal entre la acción de un órgano del estado y el origen del perjuicio.

12. ¿Se informa al titular de derechos sobre la identidad de los importadores y consignadores cuando las autoridades competentes "suspenden" las mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual, o de las que se sospecha que los infringen, así como en el caso en que se informa al titular de derechos sobre la identidad de los importadores y consignadores según lo estipulado en el artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC?

La ley no contiene disposiciones especiales al respecto. En la práctica, las autoridades aduaneras pedirán su opinión al titular del derecho y a la Oficina de la Propiedad Industrial. En el párrafo 2) del artículo 25 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio N° 55/1997 se reconoce el derecho del titular a ser informado sobre el origen de las mercancías y tener conocimiento de los documentos adjuntos. La observancia de ese derecho puede exigirse también por vía judicial.

13. Sírvanse explicar las medidas destinadas a proteger la información confidencial durante la inspección prevista en el artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC; y sírvanse indicar las disposiciones de las leyes y ordenanzas que disponen tales medidas.

En términos generales, la obligación de confidencialidad de las autoridades aduaneras se establece en el artículo 12 de la Ley N° 180/1996, en virtud de la cual se protegen el secreto comercial y la información confidencial. En los artículos 17 y 20 del Código de Comercio se define el secreto comercial y se determina el círculo de personas responsables, con inclusión de los terceros que intervengan, además de las autoridades aduaneras. La divulgación o el uso indebido de secretos comerciales pueden considerarse actos de competencia desleal y constituir la base para el resarcimiento de daños y perjuicios y la imposición de sanciones penales (artículo 149 del Código Penal).

14. Sírvanse explicar los procedimientos para las retenciones y confiscaciones que han de disponer las autoridades competentes sobre la base de los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La legislación eslovaca vigente no hace referencia a las cuestiones contenidas en los artículos 51 a 55 y 59 del Acuerdo sobre los ADPIC. Se está examinando la legislación pertinente en ese contexto.

15. Sírvanse explicar los procedimientos de apelación contra cualquier decisión dictada por las autoridades competentes, conforme a los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Véase la respuesta a la anterior pregunta 14.

16. Sírvanse explicar la base de cálculo de la fianza o garantía equivalente estipulada en el artículo 53 del Acuerdo sobre los ADPIC, que las autoridades competentes pueden exigir al demandante cuando suspenden el despacho para libre circulación.

Véase la respuesta a la anterior pregunta 14.

17. Sírvanse explicar quién debe pagar los gastos de las retenciones basadas en el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC o de la destrucción estipulada en su artículo 59.

Véase la respuesta a la anterior pregunta 14.

18. Sírvanse explicar qué clase de situaciones se consideran "circunstancias excepcionales" en que las autoridades competentes pueden autorizar la reexportación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificada, conforme a lo estipulado en el artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Véase la respuesta a la anterior pregunta 14.

19. Sírvanse designar las leyes y ordenanzas, indicando sus disposiciones, en que se prescribe la suspensión del despacho de las mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual, o de las que se sospecha que los infringen, como lo estipula el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Véase la respuesta a la anterior pregunta 14.

20. Sírvanse indicar qué derechos de propiedad intelectual se protegen sobre la base de la demanda presentada por un titular de derechos.

Véase la respuesta a la anterior pregunta 14.

21. Sírvanse explicar la naturaleza y el contenido de los documentos que debe aportar el solicitante al presentar una demanda.

Véase la respuesta a la anterior pregunta 14.

22. Sírvanse explicar las medidas que las autoridades judiciales pueden disponer en relación con el derecho de autor y los derechos conexos, las patentes, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio y los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados, incluyendo los mandamientos judiciales, la indemnización de daños y perjuicios, la

condena al pago de los gastos y la destrucción u otra forma de eliminación de las mercancías infractoras y los materiales y accesorios utilizados para su producción.

Para empezar, convendría indicar que en la República Eslovaca el sistema judicial se compone de tres niveles o instancias. La primera instancia la representan los tribunales de distrito o tribunales de jurisdicción general. La segunda instancia está constituida por los tribunales provinciales, que funcionan como tribunales de apelación. La última instancia está representada por el Tribunal Supremo, cuya función consiste en fallar sobre recursos extraordinarios, principalmente. En determinados casos de derecho comercial y penal, los tribunales provinciales actúan como tribunales de primera instancia y la función de tribunal de apelación pasa entonces al Tribunal Supremo.

Los tribunales y el poder judicial eslovacos gozan de plena independencia, lo que significa que los jueces no tienen más limitaciones que las que les imponga su conciencia y la ley vigente. El dictamen jurídico de los tribunales de instancias superiores sólo es obligatorio para los tribunales de instancias inferiores respecto de una causa determinada. A pesar de ello, prevalece un sistema informal de precedencia que se aplica habitualmente a todas las causas y en virtud del cual las sentencias del Tribunal Supremo (sobre todo las de carácter general y representativo) se publican oficialmente y se respetan de forma generalizada. En los procedimientos de recurso (revisiones judiciales), el tribunal competente de instancia superior está facultado para modificar o confirmar la sentencia o, si la considera improcedente, suspenderla en su totalidad y remitir la causa al tribunal correspondiente de instancia inferior.

Las normas en materia de procedimientos civiles se establecen en el Código eslovaco de Procedimiento Civil, Ley N° 99/1963 del Código de Leyes, de acuerdo con los términos de disposiciones más recientes. Los requisitos que debe cumplir una parte que desee iniciar una acción son relativamente sencillos, ya que sólo habrá de hacer constar en su solicitud formal por escrito la información siguiente: identificación de las partes en el procedimiento de observancia que se inicie, fundamento del litigio, pruebas aportadas y propuesta de decisión para su adopción por el tribunal.

Según los párrafos b) y c) del artículo 80 del Código eslovaco de Procedimiento Civil, al iniciar una acción judicial, la parte puede solicitar al tribunal que determine en primer lugar si la obligación establecida por la ley se cumple en el marco de una relación jurídica o conlleva una violación de la ley. El tribunal podría asimismo determinar si existe alguna relación jurídica o algún tipo de derecho cuando un interés urgente e importante respecto de esa cuestión lo justifique. Así pues, una parte en un procedimiento de ejecución puede pedir al tribunal que emita un fallo con arreglo a alguno de los criterios pertinentes mencionados. En la práctica, eso significa que los tribunales deciden sobre las cuestiones relativas al pago de daños y perjuicios y a la compensación adecuada de daños no relacionados con la propiedad intelectual, que pueden adoptar también la forma de compensación económica. Los tribunales están autorizados para ordenar o prohibir determinadas acciones. Asimismo, pueden decidir sobre la existencia o inexistencia de un derecho o una relación jurídica, siempre que exista un interés legítimo en que se adopte tal decisión. En los procedimientos judiciales no es obligatorio que las partes estén representadas por sus abogados, y las costas equivalen al 4 por ciento de la deuda exigible, habiéndose fijado la cuantía máxima en 100.000 coronas eslovacas, o en 500.000 coronas en los casos comerciales.

Existen varias situaciones en que los tribunales provinciales funcionan como tribunales de primera instancia, concretamente en los casos siguientes: observancia de los derechos relativos a nombres comerciales, marcas de fábrica o de comercio y denominaciones de origen, cuestiones de relación jurídica que afecten a la protección de la competencia, competencia desleal, derechos de patente, esquemas de trazado y dibujos y modelos industriales y topografías de productos semiconductores protegidos como objeto de comercio. Lo mismo cabe decir de las relaciones

resultantes del derecho de autor y los derechos conexos. En tales casos, el Tribunal Supremo funciona como tribunal de apelación.

Los requisitos formales necesarios para interponer recurso contra una sentencia son prácticamente idénticos a los que se exigen para iniciar una acción. La estructura de los tribunales y sus relaciones recíprocas se establecen en la Ley de Tribunales y del Poder Judicial N° 335/1991 del Código de Leyes, de acuerdo con los términos de disposiciones más recientes. La jurisdicción de los tribunales -tanto en lo que respecta a causas y localidades como a sus funciones- se rige por el ya mencionado Código eslovaco de Procedimiento Civil.

En lo que se refiere a la protección de las patentes, existe un órgano administrativo central, la Oficina eslovaca de la Propiedad Industrial, que mantiene los registros relativos a las distintas materias de propiedad industrial y adopta decisiones respecto de las inscripciones o cancelaciones, anulaciones de patentes, introducción de cambios en los registros y desarrollo del programa pertinente. Las decisiones de la Oficina pueden, una vez agotados todos los recursos válidos de la vía administrativa, someterse, mediante una demanda formal, al arbitrio de un tribunal que examine la legalidad de la decisión. Las decisiones de la Oficina eslovaca de la Propiedad Industrial pueden ser revisadas por el Tribunal Supremo.

Al margen de todos los trámites ordinarios del procedimiento judicial, cuando se trate de un caso urgente de observancia de los derechos podrá presentarse una solicitud de medidas preliminares, de conformidad con el artículo 74 y las siguientes disposiciones del Código eslovaco de Procedimiento Civil. En virtud de los apartados d), e) y f) del párrafo 1 del artículo 76, el tribunal está facultado para ordenar en principio a una parte, en aplicación de medidas preliminares, que pague una garantía o deposite un objeto en el tribunal, que ejecute una acción o se abstenga de hacerlo, o que sufrague determinados gastos; asimismo, el Tribunal puede prohibir a una parte la utilización de determinados objetos o el ejercicio de ciertos derechos. Desde el punto de vista procesal, las medidas preliminares representan una acción notablemente simplificada y rápida, que permite al tribunal omitir el trámite de oír a las partes en persona pero, en cambio, le obliga a dictar un fallo en el plazo de un mes, contado a partir del día en que se haya interpuesto la correspondiente demanda. Las medidas preliminares pueden ejecutarse inmediatamente, con independencia de que sean objeto de posibles recursos, pero su efecto es limitado en el tiempo y depende también de su contenido, ya que no deben ser sustitutorias de una sentencia válida sobre el fondo del litigio y su efecto está, en principio, condicionado a la incoación posterior de la acción judicial pertinente dentro del plazo que oportunamente determine el tribunal. Tan pronto como exista un fallo válido sobre el fondo del litigio, el efecto de las medidas preliminares cesa por imperativo legal. También puede cesar cuando el plazo establecido por el tribunal haya vencido o si la parte no cumple su obligación de emprender la acción judicial oportuna en relación con el caso.

23. Sírvanse explicar si la cuantía de la indemnización cuyo pago imponen las autoridades judiciales a quien infringe derechos de propiedad intelectual en favor del titular de los derechos constituye una reparación adecuada del daño sufrido por éste, y qué criterios y método de cálculo determinan la cuantía de la indemnización.

El pago de la indemnización por daños y perjuicios o la reparación adecuada del daño resultante de actos no amparados por derechos de propiedad intelectual en relación con contenidos de propiedad industrial pertenece al ámbito de competencia de los tribunales provinciales. Esa competencia se extiende también al derecho de autor y los derechos conexos. En general, el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios se rige por el artículo 420 y las disposiciones siguientes del Código Civil, y también por determinadas disposiciones de leyes especializadas, como por ejemplo el artículo 26 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, que aparte del pago de indemnizaciones por daños y perjuicios establece también el derecho a la reparación adecuada del daño causado por quien no es titular del derecho, incluida la reparación en forma de compensación económica. En el

caso de invenciones y dibujos y modelos industriales, la normativa aplicable se establece en el artículo 75 de la Ley N° 527/1990 del Código de Leyes. Ante todo, la parte perjudicada tiene la obligación de justificar la reclamación por daños y perjuicios, calcular su cuantía e identificar al responsable del daño. A este respecto, es necesario indicar que en la República Eslovaca ha funcionado durante mucho tiempo un sistema de expertos autorizados que emiten su dictamen sobre determinadas materias específicas.

24. Sírvanse explicar si la cuantía de la indemnización cuyo pago imponen las autoridades judiciales a quien infringe derechos de propiedad intelectual en favor del titular de los derechos incluye los gastos de investigación y los honorarios de los abogados que sean procedentes.

El tribunal decidirá, al dictar su sentencia sobre el fondo del litigio, si procede fijar una compensación por las costas. El derecho al pago de las costas se rige por el artículo 137 y siguientes del Código eslovaco de Procedimiento Civil. De acuerdo con el artículo 142 del Código, el tribunal reconocerá a la parte plenamente ganadora el derecho a ser compensada por todos los gastos judiciales necesarios para ejecutar o defender la ley eficazmente contra la parte perdedora. En casos de sentencia parcialmente favorable, el tribunal distribuirá los pagos según proceda o decidirá que las partes no tienen derecho a indemnización por costas. Así pues, la parte ganadora puede ejercer el derecho a la indemnización de todos los gastos en que, de forma demostrable, haya incurrido para lograr el cumplimiento o la defensa eficaces de la ley frente a la parte contraria, comprendidos los gastos personales, el importe del dictamen pericial, los honorarios de abogados, los gastos judiciales, etc. Una reglamentación similar se establece también en la Ley de Procedimiento Administrativo.

25. Sírvanse indicar en qué grado han estimado los tribunales la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios desde el 1° de enero de 1996. Sírvanse explicar si la cuantía de la indemnización constituye una reparación adecuada del daño sufrido por el titular de los derechos, y en qué forma se ajustan esos procedimientos civiles al artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El pago de la indemnización por daños y perjuicios o la reparación adecuada del daño resultante de actos no amparados por derechos de propiedad intelectual en relación con contenidos de propiedad industrial pertenece al ámbito de competencia de los tribunales provinciales. Esa competencia se extiende también al derecho de autor y los derechos conexos. En general, el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios se rige por el artículo 420 y las disposiciones siguientes del Código Civil, y también por determinadas disposiciones de leyes especializadas, como por ejemplo el artículo 26 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, que aparte del pago de indemnizaciones por daños y perjuicios establece también el derecho a la reparación adecuada del daño causado por quien no es titular del derecho, incluida la reparación en forma de compensación económica. En el caso de invenciones y dibujos y modelos industriales, la normativa aplicable se establece en el artículo 75 de la Ley N° 527/1990 del Código de Leyes. Ante todo, la parte perjudicada tiene la obligación de justificar la reclamación por daños y perjuicios, calcular su cuantía e identificar al responsable del daño. A este respecto, es necesario indicar que en la República Eslovaca ha funcionado durante mucho tiempo un sistema de expertos autorizados que emiten su dictamen sobre determinadas materias específicas.

El tribunal decidirá, al dictar su sentencia sobre el fondo del litigio, si procede fijar una compensación por las costas. El derecho al pago de las costas se rige por el artículo 137 y siguientes del Código eslovaco de Procedimiento Civil. De acuerdo con el artículo 142 del Código, el tribunal reconocerá a la parte plenamente ganadora el derecho a ser compensada por todos los gastos judiciales necesarios para ejecutar o defender la ley eficazmente contra la parte perdedora. En casos de sentencia parcialmente favorable, el tribunal distribuirá los pagos según proceda o decidirá que las partes no tienen derecho a indemnización por costas. Así pues, la parte ganadora puede ejercer el

derecho a la indemnización de todos los gastos en que, de forma demostrable, haya incurrido para lograr el cumplimiento o la defensa eficaces de la ley frente a la parte contraria, comprendidos los gastos personales, el importe del dictamen pericial, los honorarios de abogados, los gastos judiciales, etc. Una reglamentación similar se establece también en la Ley de Procedimiento Administrativo.

La normativa legal no prevé el concepto de reparación adecuada. La reparación por el daño causado puede establecerse únicamente mediante una demanda de indemnización por daños y perjuicios. No obstante, esa reparación sólo es posible en caso de que el demandante haya obrado ilegalmente o de forma contraria a las buenas costumbres o haya participado en actividades de competencia desleal con resultado de descrédito, con arreglo a los términos del artículo 50 del Código de Comercio. Por descrédito se entiende cualquier acción mediante la cual un competidor facilita o divulga información falsa acerca de la situación, los productos y los resultados de otro competidor, cuando esa información pueda causar daño al segundo. Si se determina que la acción del demandante no es ilegal ni contraria a las buenas costumbres, será difícil establecer una reparación, ya que no se ha producido daño en el sentido legal. En ese caso concreto, la legislación de la República Eslovaca no coincide suficientemente con el Acuerdo sobre los ADPIC.

No se dispone de datos estadísticos sobre la cuantía de las indemnizaciones por daños y perjuicios estimadas por los tribunales desde el 1º de enero de 1996.

26. Sírvanse explicar la naturaleza y la cuantía de las sanciones (penas de prisión o multas) en los asuntos penales. Sírvanse explicar igualmente si esas sanciones están en conformidad con el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige la imposición de sanciones suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente.

La Oficina no dispone directamente de los datos estadísticos requeridos, por lo que ha solicitado al Ministerio de Justicia y a la Administración Central de Aduanas la información mencionada.

Para responder a la pregunta relativa a los aspectos penales de la protección de la propiedad intelectual quizás sea preferible citar las disposiciones concretas de los artículos 150 a 152 del Código de Procedimiento Penal.

Artículo 150 - Infracción de los derechos relativos a marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales y denominaciones de origen protegidas

- 1) La persona que haya puesto en el mercado productos o prestado servicios al amparo de una marca idéntica a una marca de fábrica o de comercio cuya titularidad exclusiva corresponda a otra persona, o un signo susceptible de crear confusión por su similitud con esa marca de fábrica o de comercio, será sancionada con pena de prisión durante un período de un año, multa o decomiso del objeto.
- 2) El mismo castigo se impondrá a la persona que, para lograr un beneficio económico:
 - a) use ilícitamente un nombre comercial o cualquier signo similar a ese nombre susceptible de crear confusión, o
 - b) ponga en circulación productos ilícitamente marcados con una denominación de origen cuya titularidad exclusiva corresponda a otra persona, o con una denominación de origen similar susceptible de crear confusión.

Artículo 151 - Infracción de derechos de propiedad industrial

La persona que infrinja ilícitamente el derecho relativo a una invención, un dibujo o modelo industrial, un modelo de utilidad o una topografía de producto semiconductor protegidos será castigada con pena de prisión por un período no superior a tres años o una multa.

Artículo 152 - Infracción del derecho de autor

- 1) La persona que se beneficie ilícitamente de una obra protegida por el derecho de autor, de una interpretación o ejecución de un artista intérprete o ejecutante, de una grabación sonora o visual, de un programa de radiodifusión o de televisión protegido por un derecho similar al derecho de autor en cuanto a su pertenencia al autor, artista intérprete o ejecutante, productor de la grabación sonora o visual, organismo de radiodifusión o televisión u otro titular de ese derecho, o la persona que de alguna otra forma infrinja los derechos mencionados, serán castigadas con pena de prisión por un período no superior a dos años, con multa o con el decomiso del objeto.
- 2) El infractor será castigado con pena de prisión de seis meses a cinco años o con multa o decomiso del objeto si:
 - a) obtiene beneficios considerables mediante la acción expuesta en el párrafo 1, o
 - b) comete una infracción de gran alcance.

Cabe subrayar que es facultad discrecional del juez y, previamente, del fiscal determinar la intensidad de las acciones ilícitas que examinen y establecer de ese modo la existencia de un acto delictivo. En lo que respecta al artículo 150, la condición para su aplicación es el despacho de las mercancías a libre práctica o la prestación de un servicio con utilización ilícita directa de un signo protegido. En la República Eslovaca no se ha adquirido aún una experiencia que pueda servir para establecer pautas generales, sobre todo por parte del poder judicial.

Segunda parte

En todo caso, corresponde al demandante determinar el importe del daño. Si ese importe se justifica y prueba adecuada y fehacientemente, el tribunal tendrá motivos para pronunciarse sobre la demanda de indemnización por daños y perjuicios. En los casos en que el titular del derecho sufra pérdidas materiales que no tengan el carácter de daños y perjuicios desde el punto de vista jurídico, por no estar causadas por una acción ilegal, o en caso de que se produzcan pérdidas no materiales, el tribunal puede reconocer a la parte perjudicada el derecho al resarcimiento adecuado, incluso en forma de compensaciones pecuniarias. En tal caso, el juez fija discrecionalmente la cantidad de dinero por concepto de resarcimiento, que evidentemente se basa en la solicitud formulada y, aunque no se trata de un importe establecido objetivamente, sino determinado de forma discrecional, ha de tener una base racional.

Consideramos que la información expuesta responde a la pregunta sobre los eventuales gastos del titular del derecho que deberían pagarse según el párrafo 1 del artículo 45.

La parte ganadora o parcialmente ganadora de un pleito puede obtener el derecho al resarcimiento de las costas del procedimiento en la medida en que la sentencia le sea favorable. Esas costas se consideran aparte de los honorarios de asesoramiento jurídico, de los abogados y de otros honorarios cuyo pago demostrable y justificado guarde relación con la ejecución del derecho por vía judicial. El reembolso de los honorarios de los abogados se calcula objetivamente de acuerdo con las

tarifas establecidas mediante el decreto del Ministerio de Justicia en que se determina la remuneración de los abogados por los distintos actos, en función de su naturaleza y su número y del importe de la reclamación.

En cuanto a la aplicación de la segunda frase del párrafo 2 del artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC, consideramos que se lleva a cabo en virtud el párrafo 3) del artículo 26 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio N° 55/1997, que establece el derecho al resarcimiento por perjuicios o a la indemnización pertinente, que puede también consistir en una compensación pecuniaria con independencia de que el infractor haya violado los derechos del titular y causado, a sabiendas o no, perjuicios u otras pérdidas.

IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR SUIZA

1. Sírvanse indicar si los tratados internacionales que contengan disposiciones detalladas dirigidas a las autoridades (judiciales) y no al propio Estado tienen efecto inmediato en su sistema. En caso negativo, cuando surge en su país una divergencia entre las leyes o prácticas relativas a la propiedad intelectual y el acuerdo internacional, ¿prevalece automáticamente el segundo? De no ser así, sírvanse exponer los medios que permiten a su país cumplir sus obligaciones internacionales. Tengan a bien citar los textos o la jurisprudencia pertinentes.

En primer lugar, es necesario responder a la parte de la pregunta 1 relativa a la precedencia de los convenios internacionales ratificados y publicados sobre el derecho interno eslovaco en caso de contradicción. A ese respecto, es preciso destacar que, de conformidad con el artículo 11 de la Constitución de la República Eslovaca, sólo los convenios relativos a la protección de los derechos humanos tienen precedencia directa sobre la legislación, de forma que en los casos en que un convenio internacional reconozca ese tipo de derechos con mayor amplitud que la legislación nacional, y también en los casos en que exista contradicción directa entre un convenio y la legislación, los tribunales pueden aplicar directamente el convenio internacional. Con arreglo al párrafo e) del artículo 125 de la Constitución de la República Eslovaca, otros convenios internacionales tendrán también precedencia cuando el Tribunal Constitucional dicte sentencias relativas a la conformidad de las normas jurídicas de carácter generalmente vinculante con los convenios internacionales proclamados en la forma prevista para la promulgación de las leyes. Si el Tribunal Constitucional dicta sentencia respecto a la no conformidad de la ley con un convenio internacional, esa ley, o su parte correspondiente, quedan sin efecto al cabo de seis meses, salvo que en ese intervalo hayan sido modificadas por el Parlamento de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional. Como resultado de lo expuesto, cualquier convenio internacional distinto de los relativos a derechos humanos tiene precedencia sobre el derecho interno, pero esa precedencia no puede aplicarse directamente, sino sólo después de que el proceso mencionado se haya llevado a término en el Tribunal Constitucional.

El proceso descrito en el artículo 125 de la Constitución no se aplica en la práctica debido a que las obligaciones internacionales resultantes de los acuerdos publicados en el Boletín Oficial pasan a ser parte de la legislación interna. Esa condición de acuerdo internacional es resultado de lo dispuesto en los párrafos 4 3), 6 1b) y 2 de la Ley N° 1/1993. La posible contradicción o imperfección de la legislación se subsana mediante la modificación o recodificación de la disposición de que se trate.

2. En el artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece que "... en los casos en que proceda, el plazo mencionado [de diez días] podrá ser prorrogado por otros diez días hábiles". ¿Se ha previsto esa prórroga en sus leyes? En caso afirmativo, sírvanse mencionar las disposiciones pertinentes. En caso contrario, tengan a bien indicar de qué forma puede un solicitante acogerse a esa posibilidad prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Actualmente, la normativa sobre marcas de fábrica o de comercio y aduanas no permite al titular del derecho solicitar oficialmente la intervención de las autoridades aduaneras en las cuestiones de imitación o falsificación de productos amparados por marcas de fábrica o de comercio o por el derecho de autor. Según el artículo 60 de la Ley de Aduanas N° 180/1996, las autoridades aduaneras están obligadas a tener presentes, en la tramitación de las formalidades de aduana, las prohibiciones y restricciones relacionadas con la protección de la propiedad intelectual. El titular del derecho puede emprender acciones para suspender el despacho de mercancías en la frontera y, en lo que respecta a su derecho, las autoridades aduaneras están obligadas a respetarlo. Sin embargo, esa modificación no es suficiente, ya que el titular del derecho no pasa a ser parte en un procedimiento a través de esa acción ni tiene los derechos procesales que tendría si fuese parte en un procedimiento. Por otra parte, no se puede exigir una garantía financiera en los casos en que se determine que la retención de las mercancías ha sido injustificada y haya causado daño o pérdidas materiales. La legislación modificada vigente no cumple las disposiciones de los artículos 52 a 57 y 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, por lo que se está examinando una nueva legislación específica sobre medidas en frontera en que se tienen en cuenta, entre otras cosas, esas disposiciones.

V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS

Obligaciones generales

1. En el párrafo 1 del artículo 41 y en el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que deberán establecerse procedimientos para la observancia efectiva de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el Acuerdo. Sírvanse describir la estructura de los procedimientos judiciales y administrativos³ de la República Eslovaca en que las partes pueden hacer valer su derecho de propiedad intelectual a nivel local, provincial y nacional, indicando la competencia de cada tipo de tribunal u órgano administrativo y explicar las relaciones, si las hubiere, entre los diversos tipos de tribunales y órganos administrativos. Sírvanse citar las leyes y otras disposiciones por las que se establece la estructura, con referencia a cada tipo de tribunal y órgano administrativo.

Para empezar, convendría indicar que en la República Eslovaca el sistema judicial se compone de tres niveles o instancias. La primera instancia la representan los tribunales de distrito o tribunales de jurisdicción general. La segunda instancia está constituida por los tribunales provinciales, que funcionan como tribunales de apelación. La última instancia está representada por el Tribunal Supremo, cuya función consiste en fallar sobre recursos extraordinarios, principalmente. En determinados casos de derecho comercial y penal, los tribunales provinciales actúan como tribunales de primera instancia y la función de tribunal de apelación pasa entonces al Tribunal Supremo.

Los tribunales y el poder judicial eslovacos gozan de plena independencia, lo que significa que los jueces no tienen más limitaciones que las que les imponga su conciencia y la ley vigente. El dictamen jurídico de los tribunales de instancias superiores sólo es obligatorio para los tribunales de instancias inferiores respecto de una causa determinada. A pesar de ello, prevalece un sistema informal de precedencia que se aplica habitualmente a todas las causas y en virtud del cual las sentencias del Tribunal Supremo (sobre todo las de carácter general y representativo) se publican oficialmente y se respetan de forma generalizada. En los procedimientos de recurso (revisiones judiciales), el tribunal competente de instancia superior está facultado para modificar o confirmar la sentencia o, si la considera improcedente, suspenderla en su totalidad y remitir la causa al tribunal correspondiente de instancia inferior.

³ Estas preguntas se refieren tanto a la observancia judicial como a la administrativa de los derechos de propiedad intelectual habida cuenta del artículo 49 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Las normas en materia de procedimientos civiles se establecen en el Código eslovaco de Procedimiento Civil, Ley N° 99/1963 del Código de Leyes, de acuerdo con los términos de disposiciones más recientes. Los requisitos que debe cumplir una parte que desee iniciar una acción son relativamente sencillos, ya que sólo habrá de hacer constar en su solicitud formal por escrito la información siguiente: identificación de las partes en el procedimiento de observancia que se inicie, fundamento del litigio, pruebas aportadas y propuesta de decisión para su adopción por el tribunal.

Según los párrafos b) y c) del artículo 80 del Código eslovaco de Procedimiento Civil, al iniciar una acción judicial, la parte puede solicitar al tribunal que determine en primer lugar si la obligación establecida por la ley se cumple en el marco de una relación jurídica o conlleva una violación de la ley. El tribunal podría asimismo determinar si existe alguna relación jurídica o algún tipo de derecho cuando un interés urgente e importante respecto de esa cuestión lo justifique. Así pues, una parte en un procedimiento de ejecución puede pedir al tribunal que emita un fallo con arreglo a alguno de los criterios pertinentes mencionados. En la práctica, eso significa que los tribunales deciden sobre las cuestiones relativas al pago de daños y perjuicios y a la compensación adecuada de daños no relacionados con la propiedad intelectual, que pueden adoptar también la forma de compensación económica. Los tribunales están autorizados para ordenar o prohibir determinadas acciones. Asimismo, pueden decidir sobre la existencia o inexistencia de un derecho o una relación jurídica, siempre que exista un interés legítimo en que se adopte tal decisión. En los procedimientos judiciales no es obligatorio que las partes estén representadas por sus abogados, y las costas equivalen al 4 por ciento de la deuda exigible, habiéndose fijado la cuantía máxima en 100.000 coronas eslovacas, o en 500.000 coronas en los casos comerciales.

Existen varias situaciones en que los tribunales provinciales funcionan como tribunales de primera instancia, concretamente en los casos siguientes: observancia de los derechos relativos a nombres comerciales, marcas de fábrica o de comercio y denominaciones de origen, cuestiones de relación jurídica que afecten a la protección de la competencia, competencia desleal, derechos de patente, esquemas de trazado y dibujos y modelos industriales y topografías de productos semiconductores protegidos como objeto de comercio. Lo mismo cabe decir de las relaciones resultantes del derecho de autor y los derechos conexos. En tales casos, el Tribunal Supremo funciona como tribunal de apelación.

Los requisitos formales necesarios para interponer recurso contra una sentencia son prácticamente idénticos a los que se exigen para iniciar una acción. La estructura de los tribunales y sus relaciones recíprocas se establecen en la Ley de Tribunales y del Poder Judicial N° 335/1991 del Código de Leyes, de acuerdo con los términos de disposiciones más recientes. La jurisdicción de los tribunales -tanto en lo que respecta a causas y localidades como a sus funciones- se rige por el ya mencionado Código eslovaco de Procedimiento Civil.

En lo que se refiere a la protección de las patentes, existe un órgano administrativo central, la Oficina eslovaca de la Propiedad Industrial, que mantiene los registros relativos a las distintas materias de propiedad industrial y adopta decisiones respecto de las inscripciones o cancelaciones, anulaciones de patentes, introducción de cambios en los registros y desarrollo del programa pertinente. Las decisiones de la Oficina pueden, una vez agotados todos los recursos válidos de la vía administrativa, someterse, mediante una demanda formal, al arbitrio de un tribunal que examine la legalidad de la decisión. Las decisiones de la Oficina eslovaca de la Propiedad Industrial pueden ser revisadas por el Tribunal Supremo.

Al margen de todos los trámites ordinarios del procedimiento judicial, cuando se trate de un caso urgente de observancia de los derechos podrá presentarse una solicitud de medidas preliminares, de conformidad con el artículo 74 y las siguientes disposiciones del Código eslovaco de Procedimiento Civil. En virtud de los apartados d), e) y f) del párrafo 1 del artículo 76, el tribunal está facultado para ordenar en principio a una parte, en aplicación de medidas preliminares, que pague

una garantía o deposite un objeto en el tribunal, que ejecute una acción o se abstenga de hacerlo, o que sufrague determinados gastos; asimismo, el Tribunal puede prohibir a una parte la utilización de determinados objetos o el ejercicio de ciertos derechos. Desde el punto de vista procesal, las medidas preliminares representan una acción notablemente simplificada y rápida, que permite al tribunal omitir el trámite de oír a las partes en persona pero, en cambio, le obliga a dictar un fallo en el plazo de un mes, contado a partir del día en que se haya interpuesto la correspondiente demanda. Las medidas preliminares pueden ejecutarse inmediatamente, con independencia de que sean objeto de posibles recursos, pero su efecto es limitado en el tiempo y depende también de su contenido, ya que no deben ser sustitutorias de una sentencia válida sobre el fondo del litigio y su efecto está, en principio, condicionado a la incoación posterior de la acción judicial pertinente dentro del plazo que oportunamente determine el tribunal. Tan pronto como exista un fallo válido sobre el fondo del litigio, el efecto de las medidas preliminares cesa por imperativo legal. También puede cesar cuando el plazo establecido por el tribunal haya vencido o si la parte no cumple su obligación de emprender la acción judicial oportuna en relación con el caso.

2. Sírvanse describir brevemente el procedimiento que debe seguir una parte extranjera a fin de iniciar un procedimiento de observancia en cada uno de los tribunales y órganos administrativos mencionados en la respuesta a la pregunta 1 y citar las disposiciones legales por las que se han establecido esos procedimientos.

En principio, las partes extranjeras se hallan en las mismas condiciones ante los tribunales y ante la Oficina eslovaca de la Propiedad Industrial que los nacionales o los residentes en la República Eslovaca. En cuanto a las barreras lingüísticas, los tribunales están obligados a proporcionar servicios de traducción que serán costeados por la parte que no hable el idioma eslovaco. En el caso de los ciudadanos de la República Eslovaca que no hablen eslovaco, el Estado sufragará los gastos de traducción en los tribunales. Al contrario que en los procedimientos judiciales, en los procedimientos administrativos que se inicien ante la Oficina eslovaca de la Propiedad Industrial, las partes extranjeras han de estar representadas por un agente de patentes autorizado para intervenir ante la Oficina, es decir, un agente de patentes que ejerza sus funciones en la República Eslovaca.

3. Sírvanse determinar todo requisito que deba satisfacer una parte extranjera a fin de iniciar un procedimiento en los tribunales y órganos administrativos mencionados en la respuesta a la pregunta 1 que no se exija de un nacional de la República Eslovaca, o de un residente en ella, y citar las disposiciones legales en que se prevén dichas diferencias.

Véase la respuesta a la pregunta 2. Como ya se ha indicado, las condiciones son en principio idénticas para las partes extranjeras y para los ciudadanos de la República Eslovaca.

4. En el párrafo 1 del artículo 41 y en el artículo 48 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula el establecimiento de salvaguardias contra el abuso de los procedimientos judiciales y administrativos de observancia, previéndose que se indemnizará adecuadamente por el daño sufrido a causa de tal abuso. Sírvanse describir los medios de que se dispone en las leyes de la República Eslovaca a fin de evitar el abuso de los procedimientos judiciales y administrativos y de indemnizar por los daños sufridos como resultado de tal abuso y citar las disposiciones legales relativas a dichos medios.

La indemnización por los daños sufridos a causa de abuso en los procedimientos judiciales y administrativos de observancia está prevista en la Ley N° 58/1969 sobre la responsabilidad por el daño resultante de una decisión de las autoridades del Estado o de la aplicación de procedimientos administrativos inadecuados.

En caso de daño causado por una decisión o una sentencia ilegales es necesario interponer una demanda formal de indemnización por daños y perjuicios ante la autoridad central superior a la que ha

causado el daño. Si la demanda no se resuelve en el plazo de seis meses, la parte perjudicada puede hacer valer su derecho ante los tribunales. El Estado es responsable de los daños causados por abuso de los procedimientos administrativos. En tal caso, no es necesario el examen preliminar de la demanda, sino que ésta puede interponerse directamente contra el Estado y la autoridad concreta que ha causado el daño.

5. El párrafo 2 del artículo 41 se refiere, entre otras cosas, al costo de los procedimientos judiciales y administrativos de observancia. Sírvanse informar acerca de cualesquiera tasas cobradas por las autoridades judiciales y administrativas para iniciar las acciones legales en materia de propiedad intelectual o para continuar dichas acciones una vez emprendidas, citar las disposiciones legales en las que se establecen dichas tasas y suministrar copias de los documentos utilizados para informar al público acerca de ellas.

Los derechos judiciales se establecen en la Ley de Costas Judiciales N° 71/1992 del Código de Leyes. En la parte general de esa Ley se tratan los temas siguientes: costas judiciales, personas sujetas a pago, exención del pago de las costas judiciales, existencia y cesación de la obligación de pagar, etc. Una parte determinada de la Ley, la Escala de Tasas Judiciales, establece la cuantía de las tasas aplicables en cada caso. Esa segunda parte es especialmente importante para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, ya que se refiere a acciones relativas a patentes, invenciones, dibujos y modelos industriales, esquemas de trazado, topografías de productos semiconductores, y también a derechos de autor y derechos conexos. En esos sectores, las costas judiciales representan el 4 por ciento del precio del objeto de litigio, y van desde un mínimo de 500 coronas eslovacas hasta un máximo de 500.000 coronas eslovacas. En caso de que el objeto de litigio no pueda expresarse en términos económicos (por ejemplo, en una acción para determinar si existe algún tipo de legislación), las costas judiciales se fijan en 2.000 coronas eslovacas. Las acciones basadas en derechos relativos a nombres comerciales, marcas de fábrica o de comercio y denominaciones de origen se rigen por el epígrafe 3 de la Escala de Tasas Judiciales y están sujetas todas ellas al pago de 3.000 coronas. Las costas judiciales son pagaderas desde el momento en que se inicia la acción judicial, y también cuando una parte interpone recurso contra una sentencia.

Los derechos administrativos, es decir, las tasas cargadas por actos de procedimientos administrativos, se rigen en general por la Ley de Tasas Administrativas N° 145/1995 del Código de Leyes. Al igual que la Ley de Costas Judiciales, esa Ley consta de dos partes y, de ellas, la parte general regula las cuestiones de las tasas administrativas, las personas sujetas a pago, la obligación de pagar, etc. En la segunda parte se establecen las tasas correspondientes a los distintos actos jurídicos. Desde el punto de vista de la observancia de los derechos de propiedad intelectual, es especialmente importante la parte XVI de la Escala de Tasas, ya que en ella se establecen las tasas correspondientes a los distintos actos de los procedimientos de observancia emprendidos ante la Oficina eslovaca de la Propiedad Industrial. A modo de ejemplo, mencionamos aquí algunos de los conceptos más importantes: solicitud de patente, 800 coronas; solicitud de procedimiento de examen en materia de patentes, hasta 10 reivindicaciones, 2.500 coronas; certificado de patente, hasta 10 páginas, 2.000 coronas; prórroga de la patente, el tercero, cuarto y quinto año, 5.000 coronas en total, y el sexto año, 1.700 coronas; solicitud relativa a un esquema de trazado, 700 coronas; solicitud relativa a un dibujo o modelo industrial, 600 coronas; solicitud relativa a una topografía de producto semiconductor, 5.000 coronas; solicitud relativa a una marca de fábrica o de comercio, hasta tres clases de productos o servicios, 3.000 coronas; solicitud de cancelación de una marca de fábrica o de comercio en el registro correspondiente, 600 coronas; solicitud de renovación del registro de una marca de fábrica o de comercio, 2.500 coronas; y solicitud de una denominación de origen, 2.000 coronas.

Los derechos judiciales y administrativos se establecen en las leyes pertinentes del Código de Leyes y, en consecuencia, están a disposición plena del público. Sírvanse consultar los textos pertinentes de ambas leyes expuestos en el anexo.

6. En el párrafo 2 del artículo 41 se trata asimismo de la rapidez de los procedimientos judiciales y administrativos de observancia. Sírvanse citar las disposiciones legales por las que se establecen los plazos para los procedimientos judiciales y administrativos y, si aún no se ha hecho, proporcionar copias de las leyes o reglamentos pertinentes.

Las normas de procedimiento aplicadas a la acción civil en los tribunales no establecen plazos estrictos para el final de un procedimiento que es, en definitiva, la sentencia del tribunal. Por otra parte, según el párrafo 2 del artículo 48 de la Constitución de la República Eslovaca, "toda persona tiene derecho a que su caso sea examinado en audiencia pública, sin retrasos injustificados y en su presencia ...". Ese derecho humano básico se amplía en el párrafo 1 del artículo 100 del Código eslovaco de Procedimiento Civil, cuyo tenor es el siguiente: "Apenas se haya incoado el procedimiento, el tribunal proseguirá sus actuaciones, aun cuando no haya nuevas alegaciones, de forma que se vea la causa y se dicte sentencia lo antes posible." La cuestión de los retrasos en los procedimientos judiciales ha sido ya examinada por el Tribunal Constitucional de la República Eslovaca, que en un caso concreto dictaminó que los retrasos injustificados en los procedimientos judiciales constituían una violación de un derecho humano básico, de acuerdo con los términos de la disposición mencionada del artículo 48 de la Constitución de la República Eslovaca. El Código eslovaco de Procedimiento Civil establece asimismo bastantes plazos relativos al derecho procesal. En el artículo 204 se establece un plazo de 15 días para interponer recurso contra una sentencia, contados desde la fecha en que se haya pronunciado esa sentencia. En el artículo 230 se establece el plazo para interponer un recurso judicial especial, en particular para solicitar la reapertura del procedimiento, con un límite de tres meses desde que se hayan conocido las razones para solicitar la reapertura prevista en la ley y de tres años desde que la sentencia haya tenido carácter definitivo. Además, en el artículo 240 se establece un plazo de tres meses para presentar un recurso judicial especial de apelación de una sentencia, que sólo puede aplicarse cuando existan razones específicas y explícitas que, en general, constituyan violación de la ley por parte del tribunal. En el apartado b) del artículo 250 se establece un plazo de dos meses para la revisión judicial de una decisión adoptada por un órgano administrativo. En el párrafo 1 del artículo 160 se fija un plazo de tres días para dar cumplimiento a la obligación resultante de una sentencia judicial, salvo que el tribunal establezca un plazo distinto. Sólo el párrafo 2 del artículo 75 del Código eslovaco de Procedimiento Civil establece la obligación de que el tribunal adopte decisiones en relación con la aplicación de medidas preliminares.

El Código Civil prevé también un número bastante elevado de plazos relativos a la aplicación material de la ley. En sus artículos 100 a 105 se establece un plazo de ejecución de tres años desde que la ley se haya puesto en vigor por primera vez. En el artículo 106, el Código Civil establece un plazo máximo de tres años para presentar una demanda por daños y perjuicios contados a partir del momento en que se haya producido el daño, aunque la reclamación ha de presentarse en el término de dos años desde que la parte perjudicada haya averiguado quién es el responsable del daño. El derecho a presentar demandas de indemnización por lesiones corporales nunca prescribe, por lo que siempre se puede ejercer. En cambio, el derecho a exigir reparaciones pecuniarias sin fundamento puede ejercerse durante el plazo mencionado, y prescribe una vez transcurrido ese plazo. El derecho a ejecutar una sentencia judicial o una decisión administrativa válidas prescribe en el término de 10 años contados a partir del momento en que la sentencia o la decisión hayan tenido efecto. En cuanto a los procedimientos administrativos, existe una norma fundamental, la Ley de Procedimiento Administrativo N° 71/1967 del Código de Leyes, por la que se rigen los procedimientos de la Oficina eslovaca de la Propiedad Industrial y, salvo disposición en contrario de una norma especial, el artículo 49 establece los plazos aplicables a la adopción de decisiones en los procedimientos administrativos. En los casos sencillos, el órgano administrativo respectivo está obligado a adoptar una decisión sin demora; en otros casos, salvo disposición en contrario de una norma especial, el órgano administrativo está obligado a adoptar una decisión en el término de 30 días o, en los casos difíciles, de 60 días desde la iniciación del procedimiento. Si, debido a la naturaleza del caso, no es posible adoptar una decisión en el plazo establecido de 60 días, un órgano de apelación ha de decidir

en lo que respecta a la posible prórroga del plazo. Si el plazo se prorroga en más de 30 o, en su caso, de 60 días, la parte en el procedimiento de observancia ha de ser debidamente informada. Según el artículo 54, una parte en un procedimiento puede interponer recurso contra una decisión en el plazo de los 15 días siguientes al anuncio de esa decisión, consistente en principio en su comunicación por escrito. En cuanto a la observancia de los derechos relativos a marcas de fábrica o de comercio, ese plazo se amplía hasta un mes. En los artículos 53 a 68 se establecen otros plazos relativos a la formalización de recursos judiciales especiales. En cuanto a la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, los plazos de que disponen las partes para interponer recurso contra una sentencia se modifican, como ya se ha afirmado anteriormente, en el artículo 42, y su prórroga es también aplicable a la presentación de reclamaciones contra solicitudes publicadas de marcas de fábrica o de comercio con arreglo al artículo 9, que prevé un plazo máximo de tres meses.

7. Sírvanse explicar cualesquiera disposiciones del sistema de observancia de la República Eslovaca que garanticen la rapidez de los recursos. Además, sírvanse explicar qué disposiciones existen a fin de evitar las demoras deliberadas en que incurran las partes en un procedimiento e indicar las circunstancias en que se aplican esas disposiciones.

La medida aplicable al respecto, utilizada también para evitar las demoras deliberadas de los procedimientos judiciales, está prevista básicamente en el artículo 101 del Código eslovaco de Procedimiento Civil. Esa disposición ordena a todas las partes que contribuyan en la medida de lo posible a alcanzar el objetivo del procedimiento, sobre todo mediante la identificación de pruebas y el acatamiento de los mandatos del tribunal. Por otra parte, el tribunal prosigue sus actuaciones aunque las partes no se muestren activas. Si una parte citada judicialmente no comparece en persona ni presenta una solicitud para aplazar la vista, el tribunal está facultado para actuar en ausencia de esa parte en lo que respecta al contenido de la demanda y a las pruebas presentadas hasta ese momento. Si el tribunal requiere a una parte para que realice una declaración en relación con una alegación determinada, puede añadir a su requerimiento una advertencia de que, si la parte no realiza declaraciones en un plazo determinado se considerará que no tienen nada que objetar respecto de esa alegación. El tribunal puede adoptar medidas disciplinarias contra una parte que desatienda sus requerimientos y haga caso omiso de ellos; esas medidas pueden consistir en multas e incluso en la notificación de decisiones judiciales por la policía. Las partes que se hallen en esa situación pueden ser obligadas a pagar los gastos judiciales que hayan ocasionado. En los artículos 53 y 54 del Código eslovaco de Procedimiento Civil, así como en otras de sus disposiciones, se establecen medidas disciplinarias. Una normativa análoga está contenida en la Ley de Procedimiento Administrativo, en que se establece que la prolongación deliberada de los procedimientos causada por la inactividad o desobediencia al órgano competente de una parte o un tercero pueden sancionarse con una multa. Según el artículo 50 de la Ley de Procedimiento Administrativo, si el órgano administrativo no interviene en el caso o no llega a adoptar una decisión en los plazos establecidos al efecto por la ley, es decir, en los plazos mencionados de 30 y 60 días, y si el remedio no puede concederse de otro modo, el órgano superior, que en general funcionará como órgano de apelación, está facultado para adoptar una decisión sobre el caso.

8. En el párrafo 3 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC se requiere que las decisiones sobre el fondo de un caso se formulen, preferentemente, por escrito para determinar mejor el razonamiento en que se basa la decisión. Sírvanse informar, con respecto a cada tipo de tribunal u órgano administrativo mencionado en la pregunta 1, si los jueces o funcionarios administrativos deben presentar sus decisiones por escrito y citar las disposiciones legales en que se requieren esas opiniones escritas.

En el Código eslovaco de Procedimiento Civil se establece estrictamente el requisito de exponer en un auto escrito las decisiones sobre el fondo del caso y (con pequeñas excepciones) también las decisiones de procedimiento. En los artículos 157 y 158 del Código se establece lo relativo a ese auto y su entrega a una parte en el procedimiento. Asimismo, en los artículos 168 y 169

del Código se establece la obligación de poner por escrito y entregar al interesado las decisiones de procedimiento. El mismo criterio se aplica a las decisiones adoptadas en los procedimientos administrativos, ya que en el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 71/1967 del Código de Leyes se establecen los requisitos relativos a las decisiones, incluidas su formulación por escrito y su entrega directa a todas las partes.

9. En el párrafo 3 del artículo 41 se estipula también que las decisiones sobre el fondo de un caso sólo estarán basadas en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas. Sírvanse informar, con respecto a cada tipo de tribunal u órgano administrativo mencionado en la pregunta 1, qué factores pueden ser tenidos en cuenta por un juez o un funcionario administrativo al adoptar una decisión y citar las disposiciones legales que establecen la base sobre la cual pueden adoptar sus decisiones los jueces y funcionarios administrativos.

Se trata de una pregunta de gran amplitud. El derecho básico de una parte en un procedimiento judicial o administrativo se establece en el artículo 48 de la Constitución de la República Eslovaca del modo siguiente:

- "1) Nadie puede ser privado del derecho a querellarse ante su juez legítimo. La competencia de los tribunales se establecerá por ley.
- 2) Toda persona tiene derecho a que su caso se examine en audiencia pública, sin demoras injustificadas y en su presencia, de forma que pueda declarar en relación con todas las pruebas presentadas. Sólo podrá denegarse el acceso al público en determinados casos previstos por la ley."

En el Código eslovaco de Procedimiento Civil -Ley N° 99/1963 del Código de Leyes-, de acuerdo con los términos de disposiciones más recientes, se establecen con más detalle los derechos y las obligaciones de todas las partes en los procedimientos judiciales, así como todas las formas y los métodos de presentación de pruebas. La Ley de Procedimiento Administrativo N° 71/1967 del Código de Leyes contiene una disposición análoga aplicable a los procedimientos administrativos.

10. En el párrafo 4 del artículo 41 se estipula que los Miembros de la OMC estarán obligados a prever una revisión por una autoridad judicial de ciertas decisiones judiciales y administrativas en los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual. Sírvanse describir qué limitaciones jurídicas, si las hubiere, se imponen a la capacidad de una de las partes en un procedimiento de observancia de los derechos de propiedad intelectual para lograr que otra autoridad judicial proceda a la revisión tanto de las decisiones en materia de procedimiento como de las decisiones finales, y citar las disposiciones legales en que se estipulan dichas revisiones.

En el párrafo 2 del artículo 46 de la Constitución de la República Eslovaca se reconoce el derecho de toda parte a presentar recurso contra una decisión administrativa y a que ese recurso sea examinado por un tribunal distinto e independiente. Desde el punto de vista del procedimiento, ese examen de la legalidad de las decisiones administrativas se rige en general por los artículos 244 y siguientes del Código eslovaco de Procedimiento Civil. En principio, toda decisión administrativa está sujeta a la facultad de revisión de los tribunales, a menos que se halle explícitamente exenta de esa sujeción en virtud de la ley, es decir, del Código eslovaco de Procedimiento Civil. De acuerdo con el apartado b) del párrafo 1 del artículo 250 de ese Código, la acción judicial ha de iniciarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el órgano administrativo de último recurso haya comunicado su decisión a la parte correspondiente. En el párrafo 2 del artículo 249 se establecen los requisitos necesarios para iniciar tal acción. Asimismo, en el artículo 248 se establece qué decisiones no están sujetas a la facultad de revisión de los tribunales, y se añade la importante disposición de que

ninguna decisión relacionada con los derechos y libertades básicos puede estar nunca exenta de esa sujeción. Así pues, podemos afirmar que la facultad de revisión de los tribunales es general y no existen otras limitaciones que las ya mencionadas. Los derechos y las obligaciones de todas las partes en procedimientos judiciales y administrativos se establecen en el Código eslovaco de Procedimiento Civil y en la Ley de Procedimiento Administrativo. Toda parte en un procedimiento de observancia tiene derecho a que se le notifique oficialmente y por escrito cualquier acción que se haya emprendido en relación con ella, y a que se le entregue todo el material conexo de importancia, como documentos de prueba, etc. Asimismo, la parte en un procedimiento tiene el derecho y la obligación, si el órgano competente así lo decide, de formular una declaración escrita sobre la acción iniciada y también sobre el conjunto de las pruebas. Además, la parte tiene derecho a asistir personalmente a la presentación de las pruebas y a presentar otras pruebas y ser oída en relación con ellas. El hecho de que una parte sea privada de los derechos mencionados constituye un motivo para que el órgano de apelación anule la decisión pertinente y remita el caso para que se abra un nuevo procedimiento.

Procedimientos y recursos civiles y administrativos

11. En el artículo 42 se estipula que se notificarán a los demandados los procedimientos judiciales y administrativos de observancia de los derechos de propiedad intelectual iniciados contra ellos. Sírvanse describir los procedimientos seguidos en cada tipo de tribunal y órgano administrativo mencionado en la pregunta 1 para notificar a las partes demandadas los procedimientos que han sido iniciados contra ellas, indicar la información comunicada acerca del procedimiento y citar las disposiciones legales por las que se establecen estos procedimientos.

Véase la respuesta a la anterior pregunta 10.

12. En el artículo 42 se estipula también que las partes en los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual podrán estar representadas por un abogado y no se les impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales. Sírvanse describir cualesquiera limitaciones que existen con arreglo a las leyes de la República Eslovaca a la capacidad de una de las partes en dicho procedimiento para estar representada por un abogado independiente y cualquier obligación que se imponga a la parte para que comparezca personalmente en un procedimiento. Sírvanse citar las disposiciones legales por las que se establecen dichas limitaciones y se imponen esas obligaciones.

Las cuestiones relativas a la representación de una parte por un abogado se rigen por los artículos 24 y siguientes del Código eslovaco de Procedimiento Civil. No existen limitaciones a la representación en los tribunales, con la excepción de que sólo las personas legalmente autorizadas pueden actuar como abogados. La comparecencia personal de una parte en el tribunal no es necesaria cuando esté representada por un abogado. La única excepción tiene lugar cuando el tribunal considera que la comparecencia personal de una parte es indispensable, por ejemplo si la presentación de determinadas pruebas requiere la audiencia de la parte en cuestión. No existen limitaciones al derecho de una parte en un procedimiento a comparecer personalmente para justificar sus reclamaciones y realizar declaraciones sobre cualquier dato que se aporte. Al contrario, se trata de un derecho básico garantizado por la Constitución. Tampoco está limitado el derecho de las partes a presentar pruebas. En cambio, el tribunal tiene autoridad para decidir con independencia si la presentación de determinadas pruebas es o no indispensable para examinar debidamente el fondo del caso. La presentación de pruebas se rige por los artículos 120 y siguientes del segundo capítulo del Código eslovaco de Procedimiento Civil.

13. Con arreglo al artículo 42, las partes estarán facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar las pruebas pertinentes. Sírvanse describir cualesquiera limitaciones previstas en las leyes de la República Eslovaca a la capacidad de una de las partes de sustanciar una alegación o de presentar pruebas pertinentes y citar las disposiciones legales que establecen dichas limitaciones.

Véanse las respuestas a las anteriores preguntas 11 y 12.

14. En el artículo 42 se estipula, con una pequeña excepción, que deberán preverse medios para identificar y proteger la información confidencial durante los procedimientos judiciales y administrativos de observancia de los derechos de propiedad intelectual. Sírvanse describir los medios previstos en las leyes de la República Eslovaca para que las partes identifiquen y protejan la información confidencial que debe presentarse a fin de probar sus alegaciones y citar las disposiciones legales en que se establece dicha identificación y protección.

Los tribunales pueden ordenar a cualquiera, incluidas las partes en las actuaciones, la aportación de un documento o un objeto como prueba (párrafo 2 del artículo 129 del Código de Procedimiento Civil). Asimismo, los tribunales pueden ordenar el examen de un objeto en el lugar en que esté depositado (artículo 130), y oír a las partes en las actuaciones como testigos (artículo 131). El desacato de los mandamientos judiciales puede sancionarse mediante la imposición repetida de un castigo.

De acuerdo con los artículos 35, 37 y 38 de la Ley sobre Procedimiento Civil, una autoridad administrativa posee también facultades similares.

El examen de las pruebas aportadas depende de la decisión discrecional del tribunal. En los casos en que el demandante carezca parcialmente de pruebas, el tribunal podrá tener en cuenta esa circunstancia y, en beneficio de aquél, examinar pruebas indirectas y, en casos extremos, tener también en cuenta la honradez de la parte en las actuaciones y fallar a favor del demandante, pero sólo si la parte contraria no refuta las pruebas por él aportadas. En determinados casos, la ley resuelve la supuesta falta de pruebas de la parte perjudicada mediante presunciones sólo de derecho, como por ejemplo las establecidas por el derecho de patentes en el párrafo 2 del artículo 13 de la Ley N° 527/1990 en los términos siguientes: "Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, los derechos relativos a esa patente se extenderán a los productos obtenidos directamente por medio del procedimiento patentado y, salvo que existan pruebas en contra, los productos idénticos se considerarán obtenidos mediante el procedimiento protegido." En tal caso, el tribunal puede ordenar a cualquier persona que presente documentos u objetos o requerir a esa persona para que declare como testigo en relación con los datos presentados por una parte en las actuaciones si esa parte no es capaz de aportar pruebas.

La protección de los secretos oficiales (del Estado) y profesionales se estipula en la Ley N° 100/1996. Según el párrafo 1 de su artículo 3, por secreto profesional se entiende la información o los objetos relacionados con la actividad de un órgano del Estado, comunidad u otra persona jurídica que figuren en la lista de datos constituyentes de secreto profesional de un órgano central o comunidad que, a causa de su importancia, hayan de protegerse contra la divulgación, la utilización indebida, el daño, la destrucción, la pérdida o el robo.

Cada órgano del Estado elabora una lista de secretos oficiales cuyas condiciones de divulgación y depósito se publican en el Boletín Oficial. En el caso de la Oficina de la Propiedad Industrial, se consideran materia de sus secretos oficiales las invenciones, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales y las topografías de productos semiconductores cuando un solicitante o un titular de derechos piden que se respete la confidencialidad.

En tales casos, el trato otorgado al material documental y el acceso a él están sujetos a un régimen de protección especial de acuerdo con la Ley. El mismo procedimiento se aplica en las acciones judiciales.

Otra categoría la constituyen los secretos comerciales, entre los que deben incluirse los secretos de producción. Su protección se establece en el Código de Comercio o Ley N° 513/1991, en cuyo artículo 17 se definen los secretos comerciales del modo siguiente: "Asimismo, es secreto comercial la materia de los derechos de que es titular una empresa. Constituyen secretos comerciales todos los datos de carácter comercial, productivo o técnico relacionados con una empresa que tengan valor material o inmaterial real o, al menos, potencial, y no sean, en general, accesibles a los círculos comerciales, y deberán ser oficialmente secretos cuando un empresario lo desee y él mismo garantice su confidencialidad de forma adecuada."

En el artículo 20 se establece lo siguiente: "El empresario tiene derecho a protección legal frente a la violación o amenaza de violación del derecho al secreto comercial, así como frente a la competencia desleal."

La violación del secreto comercial se define en el artículo 51 de la forma siguiente:

"Constituye violación del secreto comercial la acción por la que una persona da a conocer, revela a otra persona o utiliza en beneficio propio o de terceros un secreto comercial (artículo 17) susceptible de ser utilizado en competencia y sobre el que haya obtenido conocimientos de la forma siguiente:

- a) el secreto fue confiado a esa persona o llegó a su conocimiento de alguna otra forma (por ejemplo, a través de documentos técnicos, instrucciones, ilustraciones, modelos o dibujos) basada en una relación de empleo o de cualquier otro tipo con su competidor o en la ejecución de funciones encomendadas por los tribunales u otros órganos,
- b) mediante acciones propias o ajenas contrarias a la ley."

Según el texto citado de los párrafos a) y b) del artículo 51, las obligaciones de terceros en materia de secretos comerciales son manifiestas, aunque muy generales.

A los efectos de las actuaciones que deban llevarse a cabo ante la Oficina Antimonopolio, en los artículos 15 y 16 de la Ley sobre Protección de la Competencia Económica N° 188/1994 se definen las obligaciones de los terceros. En el artículo 15 se dispone lo siguiente: "Las empresas están obligadas a presentar a la Oficina los documentos y la información requeridos, permitir el examen de esos documentos e información y franquear al personal de la Oficina el acceso a todos los objetos, instalaciones y medios de transporte de las empresas."

En el artículo 16 se establece lo siguiente:

- 1) "Los documentos y la información facilitadas a la Oficina por las empresas de la administración estatal y local sólo se utilizarán con los fines para los que se solicitaron."
- 2) "El personal de la Oficina, así como las personas que desempeñen funciones por cuenta de ella, están obligados a respetar la confidencialidad de la información que constituya secreto comercial y que haya llegado a su conocimiento en el desempeño de las funciones mencionadas."

La última categoría comprende la información confidencial, es decir, los datos que no reúnen las condiciones de secreto oficial, profesional o comercial, pero respecto de los cuales existen motivos racional y socialmente aceptables para mantener su confidencialidad. En general, esa categoría no está sujeta a una ley específica. Sin embargo, algunas normas de procedimiento regulan las obligaciones de terceros (especialmente de las autoridades estatales) respecto de la información confidencial.

Esas normas son los artículos 44 y 124 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 23 de la Ley sobre Procedimiento Civil N° 71/1967, el artículo 4 del Decreto del Ministerio de Justicia N° 66/1992 sobre normas de procedimiento de los tribunales de distrito y regionales

15. En el párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que una de las partes en un procedimiento de observancia de los derechos de propiedad intelectual aporte la prueba pertinente que se encuentre bajo su control y que haya sido identificada por la parte contraria cuando esta última haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga para sustentar sus alegaciones. Sírvanse describir cómo, y en qué condiciones, los jueces y funcionarios administrativos pueden ordenar que se aporten pruebas pertinentes en los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual y citar las disposiciones legales relativas a dichas órdenes.

Véase la respuesta a la anterior pregunta 14.

16. La información cuya aportación puede ordenarse, a que se hace referencia en la pregunta 15, debe estar protegida si tiene un carácter confidencial. Sírvanse describir los medios existentes en las leyes de la República Eslovaca a fin de proteger dicha información y citar la disposición legal en la que se establece dicha protección, si esos medios difieren de los que se han descrito en la respuesta a la pregunta 14.

Véase la respuesta a la anterior pregunta 14.

17. En el párrafo 2 del artículo 43 se estipula que, en caso de que una de las partes deniegue el acceso a la información que han ordenado las autoridades judiciales o administrativas, esas autoridades estarán facultadas para formular determinaciones preliminares y definitivas contrarias a dicha parte. Sírvanse describir qué sanciones puede imponerse a una parte que se ha negado a aportar la información como se había ordenado y en qué condiciones se imponen las sanciones mencionadas, citando la disposición legal en que se prescriben dichas sanciones.

Véase la respuesta a la anterior pregunta 14.

18. En el párrafo 1 del artículo 44 se estipula que las autoridades judiciales y administrativas estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción o para conseguir este resultado de otra manera, entre otras cosas impidiendo que los productos infractores entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción. Sírvanse describir la autoridad de que disponen los jueces y los funcionarios administrativos a que se hace referencia en la pregunta 1 para ordenar a las partes que desistan de sus infracciones y para impedir que los productos infractores entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos. Además, sírvanse citar las disposiciones legales por las que se autorizan estas medidas.

Las decisiones relativas a esas cuestiones son competencia de los tribunales, más concretamente de los tribunales provinciales en su condición de tribunales de primera instancia. A ese respecto, las decisiones de los tribunales han de ajustarse, por ejemplo, al derecho del titular de la

marca de fábrica o de comercio, como se establece en los artículos 25 y 26 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio N° 55/1997 del Código de Leyes. Sobre esa base, el tribunal puede prohibir una acción infractora de los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio y está también facultado para imponer las oportunas medidas correctivas, incluida la retirada de las mercancías de los circuitos comerciales, etc. Así pues, en el caso de las marcas de fábrica o de comercio se aplican las disposiciones mencionadas de los artículos 25 y 26, junto con la autoridad de los tribunales, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos b) y c) del artículo 80 del Código eslovaco de Procedimiento Civil.

19. En el párrafo 2 del artículo 44 se prevé una excepción a las disposiciones del párrafo 1 con referencia a la utilización por el gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno, limitándose el recurso contra la infracción al pago de una compensación adecuada de conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31. Sírvanse describir las limitaciones a los recursos de esta clase que existen en las leyes de la República Eslovaca y citar las disposiciones legales en que se establecen esas limitaciones.

La legislación de la República Eslovaca sólo permite la utilización del objeto de derechos de propiedad intelectual por terceros sin el consentimiento del titular de esos derechos en el caso de las patentes y, más concretamente, mediante licencia obligatoria, con arreglo al artículo 20 de la Ley N° 527/1990 del Código de Leyes. La Oficina eslovaca de la Propiedad Industrial puede conceder una licencia obligatoria cuando el titular de la patente no explota su invención o la explota de modo deficiente sin motivo justificado. También puede concederse una licencia obligatoria cuando el interés público se ve amenazado. De acuerdo con los términos del párrafo 2, el derecho del titular de la patente a percibir la compensación adecuada por una licencia obligatoria, consistente en el precio de la licencia, no se ve afectado.

20. En el párrafo 1 del artículo 45 se estipula que las autoridades judiciales y administrativas estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción. Sírvanse describir la autoridad de los jueces y de los funcionarios administrativos a que se hace referencia en la pregunta 1 para ordenar a una parte considerada como infractora que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción. Sírvanse explicar los factores que se tienen en cuenta al fijar el monto del resarcimiento y citar las disposiciones legales que autorizan las órdenes sobre el pago de resarcimientos.

El pago de la indemnización por daños y perjuicios o la reparación adecuada del daño resultante de actos no amparados por derechos de propiedad intelectual en relación con contenidos de propiedad industrial pertenece al ámbito de competencia de los tribunales provinciales. Esa competencia se extiende también al derecho de autor y los derechos conexos. En general, el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios se rige por el artículo 420 y las disposiciones siguientes del Código Civil, y también por determinadas disposiciones de leyes especializadas, como por ejemplo el artículo 26 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, que aparte del pago de indemnizaciones por daños y perjuicios establece también el derecho a la reparación adecuada del daño causado por quien no es titular del derecho, incluida la reparación en forma de compensación económica. En el caso de invenciones y dibujos y modelos industriales, la normativa aplicable se establece en el artículo 75 de la Ley N° 527/1990 del Código de Leyes. Ante todo, la parte perjudicada tiene la obligación de justificar la reclamación por daños y perjuicios, calcular su cuantía e identificar al responsable del daño. A este respecto, es necesario indicar que en la República Eslovaca ha funcionado durante mucho tiempo un sistema de expertos autorizados que emiten su dictamen sobre determinadas materias específicas.

21. En el párrafo 2 del artículo 45 se estipula que los jueces y los funcionarios administrativos estarán facultados para ordenar el pago de los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados. Sírvanse describir la autoridad de los jueces y funcionarios administrativos a que se hace referencia en la pregunta 1 para ordenar el pago de los gastos del titular del derecho, las condiciones en que puede dictarse dicha orden, los factores que se tienen en cuenta al fijar el monto de los gastos, y citar las disposiciones legales por la que se autorizan dichos pagos.

El tribunal decidirá, al dictar su sentencia sobre el fondo del litigio, si procede fijar una compensación por las costas. El derecho al pago de las costas se rige por el artículo 137 y siguientes del Código eslovaco de Procedimiento Civil. De acuerdo con el artículo 142 del Código, el tribunal reconocerá a la parte plenamente ganadora el derecho a ser compensada por todos los gastos judiciales necesarios para ejecutar o defender la ley eficazmente contra la parte perdedora. En casos de sentencia parcialmente favorable, el tribunal distribuirá los pagos según proceda o decidirá que las partes no tienen derecho a indemnización por costas. Así pues, la parte ganadora puede ejercer el derecho a la indemnización de todos los gastos en que, de forma demostrable, haya incurrido para lograr el cumplimiento o la defensa eficaces de la ley frente a la parte contraria, comprendidos los gastos personales, el importe del dictamen pericial, los honorarios de abogados, los gastos judiciales, etc. Una reglamentación similar se establece también en la Ley de Procedimiento Administrativo.

22. En el artículo 46 se estipula que los jueces y los funcionarios administrativos estarán facultados para ordenar, en ciertas circunstancias, otros recursos, en particular que las mercancías sean apartadas de los circuitos comerciales, o que sean destruidas así como que se destruyan los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores. Sírvanse describir los demás recursos disponibles con arreglo a las leyes de la República Eslovaca, las condiciones en que puede ejercerse dicha autoridad, los factores que se tienen en cuenta al determinar el carácter de los recursos disponibles, y citar las disposiciones legales relativas a dichos recursos.

La legislación de la República Eslovaca no establece procedimientos judiciales o administrativos de observancia aplicables a las mercancías infractoras distintos de los ya descritos en anteriores respuestas. Es necesario indicar que en la legislación vigente no se prevé la destrucción de materiales o mercancías y que los órganos competentes recurrirían a esas medidas únicamente en los casos en que existiese responsabilidad penal y se aplicase la consiguiente sanción consistente en el decomiso o la confiscación de las mercancías. Sin embargo, se está preparando una ley específica sobre medidas en frontera.

23. En el artículo 47 se estipula que los Miembros de la OMC podrán autorizar a los jueces y a los funcionarios administrativos para que ordenen a los infractores que informen a los titulares de los derechos sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución. Sírvanse describir toda autoridad de que dispongan los jueces y funcionarios administrativos con arreglo a las leyes de la República Eslovaca para ordenar a los infractores que informen a los titulares de los derechos sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución, y describir las condiciones en que puede ejercerse esa autoridad. Sírvanse citar las disposiciones legales relativas a dichos recursos.

En el párrafo 2 del artículo 25 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio N° 55/1997 del Código de Leyes se establece el derecho resultante del artículo 47 del Acuerdo sobre los ADPIC. El titular del derecho puede recurrir a la acción judicial para ejercer su derecho a obtener información de quien quiera que distribuya o se proponga distribuir mercancías infractoras; la única condición es que

se inicie esa acción judicial y se demuestre el derecho a la marca de fábrica o de comercio concreta. En caso de que un tercero no respete la decisión judicial, el tribunal puede imponerle una multa como parte de la ejecución de su decisión. Posteriormente, puede entablarse una acción judicial por el delito de incumplimiento de la sentencia.

24. En el párrafo 2 del artículo 48 se permite que los Miembros de la OMC eximan tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe para cumplir con sus obligaciones conforme a la ley. Sírvanse explicar toda exención de las autoridades y funcionarios públicos de la responsabilidad por abuso en los procedimientos de observancia, describir las circunstancias en que no se aplicarían dichas limitaciones, y citar las disposiciones legales con arreglo a las cuales se conceden esas exenciones.

Esta pregunta ha sido ya contestada en la respuesta a la pregunta 4. La responsabilidad jurídica del Estado por el daño resultante de una decisión judicial ilícita o de un procedimiento administrativo abusivo no se ve limitada por el hecho de que el órgano de que se trate o sus representantes hayan obrado de buena fe. Lo que importa es si ha tenido lugar una decisión ilícita o un procedimiento administrativo abusivo y si se ha causado daño.

Medidas provisionales

25. En los párrafos 1 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y administrativas estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual. Con respecto a cada uno de los derechos de propiedad intelectual determinados en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse informar acerca de las medidas provisionales de que se dispone a fin de proteger los derechos de propiedad intelectual. Sírvanse citar la disposición legal pertinente por la que se establecen estos recursos provisionales.

En los artículos 74 y siguientes del Código eslovaco de Procedimiento Civil se regulan los procedimientos establecidos como medidas provisionales. La aplicación de esas medidas se ha descrito en la respuesta a la pregunta 1. La autoridad legal competente puede ordenar la adopción de medidas provisionales a demanda de la persona afectada.

26. En los párrafos 1 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y administrativas estarán autorizadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. Sírvanse determinar las medidas provisionales de que se dispone para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción y citar la disposición legal pertinente.

De conformidad con el artículo 78 del Código eslovaco de Procedimiento Civil, el tribunal puede ordenar la preservación de las pruebas pertinentes al interponerse la demanda, antes de que se inicie el procedimiento sobre el fondo del caso, si existe riesgo de que esas pruebas no se aporten más adelante o su aportación resulte muy difícil. En ese caso, el tribunal competente para conocer el fondo del asunto o el tribunal de distrito en el distrito en que las pruebas corran peligro pueden ordenar que se preserven esas pruebas. El juez lleva a cabo la preservación de pruebas con arreglo a los procedimientos jurídicos establecidos al respecto.

27. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se estipula que los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales y administrativas para que adopten medidas provisionales sin haber oído a la otra parte. Con respecto a cada uno de los derechos de propiedad intelectual determinados en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse describir brevemente las circunstancias en que las autoridades judiciales y administrativas están facultadas para adoptar medidas provisionales sin haber oído a la otra parte y citar la disposición legal pertinente.

Esta pregunta guarda relación con la ya mencionada noción de medidas provisionales, ordenadas por el tribunal al interponerse la demanda y respecto de las cuales el tribunal competente para examinar el fondo del caso deberá adoptar una decisión en el plazo de los 30 días siguientes a la fecha en que se haya iniciado la acción. Pueden imponerse medidas provisionales cuando sea necesario regular temporalmente los derechos de cada parte o exista riesgo de que la sentencia del tribunal no llegue a ejecutarse.

28. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y los órganos administrativos estarán facultados para adoptar medidas provisionales cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause "daño irreparable" al titular de los derechos. Sírvanse describir brevemente los elementos que requieren las autoridades mencionadas en las respuestas de las preguntas 25, 26 y 27 para establecer la existencia del "daño irreparable" al titular de los derechos.

La reglamentación de las medidas provisionales es bastante liberal, por lo que el demandante no está obligado a justificar la amenaza de daño irreparable. Basta con que el demandante afirme con credibilidad suficiente, en función de las circunstancias, que es necesaria una regulación temporal de los derechos de cada parte ya que de otro modo el cumplimiento de un fallo posterior sobre el fondo del asunto resultaría difícil o completamente imposible. En tal caso, el juez puede utilizar ampliamente sus facultades discrecionales sin atenerse a los estrechos límites de la imposición de medidas provisionales.

29. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se estipula también que las autoridades judiciales y los órganos administrativos estarán facultados para adoptar medidas provisionales cuando haya un "riesgo demostrable de destrucción de pruebas". Sírvanse describir brevemente qué factores tienen en cuenta las autoridades competentes para determinar si existe un "riesgo demostrable de destrucción de pruebas".

En los casos que requieran la preservación provisional de las pruebas (véase la respuesta a la pregunta 26), la normativa aplicable es igualmente liberal. Así pues, no es necesario demostrar que existe riesgo de destrucción de las pruebas, sino que basta con exponer la causa del temor a que las pruebas no puedan en modo alguno presentarse más tarde o sólo puedan presentarse con gran dificultad. También en ese caso el juez posee amplias facultades discrecionales. Sería contraproducente exponer los criterios en que se basa la decisión sobre la preservación de las pruebas, ya que tal decisión varía en cada caso concreto en función del fondo del asunto.

30. En los párrafos 3 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y administrativas estarán facultadas para exigir al demandante que presente pruebas con el fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción. Con respecto a cada derecho de propiedad intelectual definido en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse describir las pruebas que debe presentar el titular a fin de establecer su carácter de titular del derecho.

En el caso de los derechos de propiedad industrial, las pruebas son relativamente sencillas, ya que el titular puede presentar el certificado expedido por la Oficina eslovaca de la Propiedad

Industrial en que se confirma su condición de titular del derecho. El caso del derecho de autor y los derechos conexos es un poco más complejo, ya que en una situación en que la titularidad del derecho de autor sea dudosa, el tribunal ha de adoptar la decisión pertinente cuando se le solicite que establezca la autoría.

31. En los párrafos 3 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y administrativas estarán facultadas para ordenar que se aporte una fianza o garantía equivalente para proteger al demandado. Con respecto a cada derecho de propiedad intelectual determinado en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse citar la disposición legal por la que se establece una fianza o garantía equivalente.

La pregunta sobre la forma de justificar un derecho ya ha sido respondida. De momento, la normativa especializada no permite que el tribunal u otra autoridad impongan al demandante una fianza suficiente de conformidad con el párrafo 3 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.

32. En el párrafo 4 del artículo 50 se estipula que se notificará a las partes cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte. Sírvanse describir brevemente los procedimientos seguidos por cada autoridad que pueda adoptar dichas medidas a fin de notificar a las partes afectadas y señalar el plazo en que debe efectuarse la notificación.

Las medidas provisionales son aplicables desde el día en que se comuniquen por escrito a las partes, es decir, no pueden imponerse antes de que la persona obligada a cumplirlas tenga conocimiento de ellas. En general, el tribunal comunica a la parte contraria la solicitud de medidas provisionales y le pide que realice una declaración en relación con esa solicitud dentro de un plazo determinado. Es decir, se envía la notificación correspondiente a la parte, y principalmente a la persona obligada, cuando se presenta la solicitud de medidas provisionales, incluso antes de que se inicie su aplicación.

33. En el párrafo 4 del artículo 50 se requiere también que, a petición del demandado, se proceda a una revisión con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse las medidas provisionales. Sírvanse describir brevemente los procedimientos que debe seguir un demandado para iniciar los procedimientos de revisión ante cada una de las autoridades que pueden adoptar dichas medidas y precisar el plazo en que deben iniciarse esos procedimientos.

Una parte puede interponer recurso contra la decisión de adoptar medidas provisionales dentro de los 15 días siguientes a la comunicación de la decisión por escrito. El tribunal de apelación, tras oír las alegaciones de las partes, está facultado para confirmar, modificar o anular la solicitud. El procedimiento es también muy sencillo en ese caso, ya que basta con exponer o presentar directamente las pruebas que permiten poner en duda la justificación de la solicitud o la desautorizan directamente. No obstante, la decisión acerca de las facultades y obligaciones se adoptará en espera de un proceso legal con todas las garantías, ya que la efectividad de las medidas provisionales está estrictamente vinculada a la obligación de emprender la oportuna acción real.

34. En el párrafo 5 del artículo 50 se estipula que se facultará a las autoridades competentes para que exijan a los demandantes que presenten cualquier otra información necesaria para la identificación de las mercancías en relación con las cuales la autoridad debe poner en ejecución las medidas provisionales. Sírvanse describir brevemente qué otra información pueden requerir las autoridades y citar la disposición legal por la que se establece la base de esta información complementaria.

No es precisa una normativa específica basada en el párrafo 5 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que el demandante tiene obligación de presentar todas las pruebas necesarias o requeridas.

35. En los párrafos 6 y 8 del artículo 50 se estipula que si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable, las medidas provisionales adoptadas por las autoridades competentes se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado. Sírvanse indicar las disposiciones pertinentes de las leyes de la República Eslovaca por las que se autoriza la revocación o la suspensión de las medidas provisionales si los procedimientos de revisión no se inician dentro de un plazo razonable y especifiquen lo que constituye un "plazo razonable" para iniciar los procedimientos.

Con arreglo al párrafo 3 del artículo 76 del Código eslovaco de Procedimiento Civil, el tribunal establece un plazo de efectividad de las medidas provisionales o condiciona esa efectividad a la iniciación de la correspondiente acción real dentro de un plazo determinado, normalmente de un mes, y establece que las medidas provisionales dejan de tener efecto si la acción no se inicia dentro del período señalado, o cuando exista sentencia firme. El período señalado para iniciar una acción depende del tipo de tribunal y suele guardar relación también con la amplitud y complejidad de la cuestión.

36. En los párrafos 7 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y administrativas estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al demandado una indemnización adecuada por cualquier daño causado por la adopción de las medidas provisionales cuando dichas medidas hayan sido revocadas o hayan caducado, o cuando se haya determinado que no hubo infracción o amenaza de infracción. Sírvanse describir cómo determinan las autoridades competentes la "indemnización adecuada".

La normativa legal no prevé el concepto de reparación adecuada. La reparación por el daño causado puede establecerse únicamente mediante una demanda de indemnización por daños y perjuicios. No obstante, esa reparación sólo es posible en caso de que el demandante haya obrado ilegalmente o de forma contraria a las buenas costumbres o haya participado en actividades de competencia desleal con resultado de descrédito, con arreglo a los términos del artículo 50 del Código de Comercio. Por descrédito se entiende cualquier acción mediante la cual un competidor facilita o divulga información falsa acerca de la situación, los productos y los resultados de otro competidor, cuando esa información pueda causar daño al segundo. Si se determina que la acción del demandante no es ilegal ni contraria a las buenas costumbres, será difícil establecer una reparación, ya que no se ha producido daño en el sentido legal. En ese caso concreto, la legislación de la República eslovaca no coincide suficientemente con el Acuerdo sobre los ADPIC.

Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

37. En el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los países adoptarán procedimientos para que el titular de un derecho pueda presentar una demanda con objeto de que se suspenda la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor. Sírvanse precisar las autoridades competentes de la República Eslovaca facultadas para recibir demandas de que se suspenda el despacho de las mercancías que se sospecha son causa de una infracción y citar la ley o el reglamento pertinente relativa a dicha autoridad.

La legislación vigente de la República Eslovaca no prevé los derechos de los titulares con arreglo a los términos del artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC, aunque se está examinando una nueva normativa específica sobre esa cuestión.

38. Sírvanse describir los procedimientos que debe seguir el titular de un derecho para obtener que las autoridades competentes le otorguen protección en frontera, por ejemplo si deben presentar formalmente una solicitud a la autoridad judicial o administrativa competente,

así como la información que debe contener la solicitud de suspensión del despacho, y citar la ley o los reglamentos que rigen estos procedimientos.

Véase la respuesta a la anterior pregunta 37.

39. Sírvanse explicar de qué procedimientos, permitidos con arreglo al artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC, se dispone para impedir la exportación de mercancías que se sospecha son causa de infracciones en materia de derechos de autor y/o marcas de fábrica o de comercio.

Véase la respuesta a la anterior pregunta 37.

40. En el artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que el titular de un derecho que desee suspender la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor presentará pruebas a las autoridades competentes de que existe presunción de infracción de su derecho a una marca de fábrica o de comercio o de su derecho de autor. Sírvanse explicar qué pruebas pueden demostrar la presunción de infracción en la República Eslovaca.

Véase la respuesta a la anterior pregunta 37.

41. En el artículo 52 se estipula también que el titular de un derecho ofrecerá "una descripción suficientemente detallada de las mercancías" cuyo despacho debe suspenderse. Sírvanse explicar lo que se exige del titular del derecho en la República Eslovaca para que la descripción que ofrece sea "suficientemente detallada".

Véase la respuesta a la anterior pregunta 37.

42. En el artículo 52 se estipula que las autoridades competentes comunicarán al titular del derecho, dentro de un plazo razonable, si han aceptado su demanda. Sírvanse explicar dentro de qué plazo la autoridad competente responde a una solicitud de suspensión del despacho de las mercancías y, en caso de que se acepte su demanda, el plazo en que se adoptará la medida coercitiva.

Aunque el titular del derecho no pueda alegar una causa justificada para iniciar el proceso, su solicitud de procedimiento ha de aceptarse como una demanda, según el artículo 60 de la Ley de Aduanas N° 180/1996 y del Reglamento del Gobierno N° 150/1958 del Código de Leyes, de acuerdo con los términos de disposiciones más recientes. En virtud de los párrafos 3, 4 y 5 del artículo 6 del Reglamento, la autoridad competente se pronunciará sobre la demanda en el plazo de 10 días. Si ello no es posible, la admisión de la demanda ha de confirmarse en los cinco días siguientes. Sólo en casos excepcionales, una autoridad superior podrá ampliar ese plazo hasta 10 días. Con arreglo al artículo 11 del Reglamento, habrá de cursarse notificación al demandante dentro de los plazos mencionados, incluso en caso de que su demanda careciese de fundamento.

43. En el párrafo 1 del artículo 53 se estipula que las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sean suficientes para proteger al demandado e impedir abusos. Sírvanse verificar si las autoridades competentes antes mencionadas están facultadas para exigir una fianza o garantía equivalente y citar las disposiciones legales o los reglamentos que les otorgan esta facultad.

Véase la respuesta a la anterior pregunta 37.

44. En el párrafo 2 del artículo 53 se estipula que el propietario, el importador o el consignatario de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, cuyo despacho haya sido suspendido por las autoridades aduaneras, tendrá derecho, en ciertas condiciones, a obtener que se proceda al despacho de aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. Sírvanse determinar qué formas de propiedad intelectual, si las hubiere, están sujetas a las disposiciones del párrafo 2 del artículo 53 y citar las disposiciones de la ley o reglamentos pertinentes.

Véase la respuesta a la anterior pregunta 37.

45. En el artículo 54 se estipula que se notificará prontamente al importador y al demandante la suspensión o el despacho de las mercancías. Sírvanse especificar el plazo en el cual la autoridad competente debe notificar que se ha suspendido el despacho de las mercancías.

Véase la respuesta a la anterior pregunta 37.

46. En el artículo 55 se establece claramente que el titular de un derecho que solicita la suspensión del despacho de las mercancías infractoras debe iniciar un procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo ante la autoridad apropiada en un plazo razonable o bien se procederá al despacho de las mercancías. Sírvanse indicar las autoridades ante las cuales un demandante/una parte puede iniciar un procedimiento sobre el fondo del caso que permita a las autoridades aduaneras suspender el despacho de las mercancías durante más de 10 días hábiles.

Véase la respuesta a la anterior pregunta 37.

47. En el artículo 55 se estipula que se procederá a una revisión en un plazo razonable, a petición del demandado, con objeto de decidir si las medidas de suspensión deben modificarse, revocarse o confirmarse mientras se llega a un resultado del procedimiento sobre el fondo. Sírvanse indicar la autoridad que está facultada para llevar a cabo esa revisión, describir el procedimiento utilizado y citar la ley o los reglamentos aplicables.

Véase la respuesta a la anterior pregunta 37.

48. En el artículo 56 se estipula que las autoridades estarán facultadas para ordenar al demandante que indemnice a la parte demandada por cualquier daño causado por la retención infundada de las mercancías. Sírvanse indicar las autoridades que pueden ordenar al demandante que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización por el daño causado por la retención infundada de las mercancías o por la retención de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, y citar la ley y los reglamentos aplicables.

Según el artículo 420 y las disposiciones siguientes del Código Civil, el tribunal competente establece la indemnización por el daño causado. Véase la respuesta a la pregunta 20, que es también aplicable en este caso.

49. En el artículo 57 se estipula que las autoridades competentes estarán facultadas para dar al titular del derecho oportunidades para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, las mercancías retenidas. Sírvanse explicar cómo se da al titular del derecho oportunidades para que haga inspeccionar las mercancías sospechosas que han sido retenidas por las autoridades aduaneras.

El derecho de inspección no se reconoce explícitamente, pero en caso de procedimientos de oficio, la inspección por el titular del derecho suele ser un componente necesario del despacho de entrada, de conformidad con el artículo 60 de la Ley de Aduanas.

50. En el artículo 57 se estipula también que, cuando la decisión sobre el fondo del asunto sea favorable al titular del derecho, las autoridades competentes podrán asimismo estar facultadas para comunicar al titular del derecho información acerca del importador, el consignador y el consignatario. Si las autoridades competentes de la República Eslovaca pueden comunicar información relativa al importador, el consignador o el consignatario al titular del derecho, sírvanse explicar cómo se proporcionan al demandante las informaciones acerca de los nombres y direcciones de los consignadores, importadores y consignatarios y de la cantidad de mercancías de que se trata, después de haberse adoptado una decisión positiva sobre la infracción, es decir, si las autoridades comunican automáticamente la información o lo hacen previa presentación de una solicitud por escrito del titular del derecho, etc. Sírvanse citar la ley o los reglamentos relativos a estas facultades.

El derecho de información previsto en el párrafo 2 del artículo 25 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio N° 55/1997 del Código de Leyes (véase la respuesta a la pregunta 23) puede hacerse valer ante las autoridades del Estado en el contexto del artículo 60 de la Ley de Aduanas.

51. En el artículo 58 se especifican los procedimientos que deben seguirse cuando las autoridades competentes pueden actuar de oficio. Sírvanse explicar si las autoridades competentes de la República Eslovaca están facultadas para actuar de oficio y, en caso afirmativo, determinar las esferas de propiedad intelectual en las que puede llevarse a cabo una actuación de oficio.

Según el artículo 60 de la Ley de Aduanas, las autoridades aduaneras están facultadas para actuar de oficio en relación con los temas relativos a derechos de propiedad intelectual. Así pues, la normativa vigente protege la gama completa de derechos.

52. En el artículo 59 se determinan los recursos que deben estar disponibles, entre los cuales la destrucción o apartamiento fuera de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras. Sírvanse explicar lo que está permitido por ley en la República Eslovaca en cuanto a las mercancías infractoras, es decir si la ley permite la destrucción, el apartamiento o ambas cosas. Sírvanse citar la ley o los reglamentos pertinentes.

Los derechos del titular resultantes del artículo 51 se establecen especialmente en el párrafo 1 del artículo 25 y en el artículo 26 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio. Sin embargo, la legislación de la República Eslovaca no prevé la destrucción de mercancías. El tribunal está facultado para decidir con arreglo al artículo 9 del Código eslovaco de Procedimiento Civil.

53. Sírvanse determinar:

- a) **la autoridad competente que decide cómo se dispondrá de las mercancías, es decir si las mercancías serán destruidas o apartadas de los circuitos comerciales; y**
- b) **la autoridad competente que procede a la destrucción o apartamiento de las mercancías.**

Véase la respuesta a la anterior pregunta 52.

54. En el artículo 60 se permite a los Miembros que excluyan de la aplicación de las disposiciones sobre la observancia en frontera las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas. Sírvanse describir lo que constituye, con arreglo a las leyes de la República Eslovaca, una importación insignificante que está excluida de las medidas en frontera.

El artículo 60 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica mediante el apartado g) del artículo 2 de la Ley Arancelaria N° 180/1996 del Código de Leyes, que establece el concepto de "mercancías de carácter no comercial". Por mercancías de carácter no comercial han de entenderse las importaciones ocasionales que, por su tipo y cantidad, están destinadas únicamente al uso personal de los viajeros y los miembros de su familia o a servir como objetos de regalo.

Procedimientos penales

55. En el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales, en particular la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias, al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Sírvanse describir las disposiciones legales de la República Eslovaca que cumplen con esta obligación y citar los textos pertinentes.

La Oficina no dispone directamente de los datos estadísticos requeridos, por lo que ha solicitado al Ministerio de Justicia y a la Administración Central de Aduanas la información mencionada.

Para responder a la pregunta relativa a los aspectos penales de la protección de la propiedad intelectual quizás sea preferible citar las disposiciones concretas de los artículos 150 a 152 del Código de Procedimiento Penal.

Artículo 150 - Infracción de los derechos relativos a marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales y denominaciones de origen protegidas

- 1) La persona que haya puesto en el mercado productos o prestado servicios al amparo de una marca idéntica a una marca de fábrica o de comercio cuya titularidad exclusiva corresponda a otra persona, o un signo susceptible de crear confusión por su similitud con esa marca de fábrica o de comercio, será sancionada con pena de prisión durante un período de un año, multa o decomiso del objeto.
- 2) El mismo castigo se impondrá a la persona que, para lograr un beneficio económico:
 - a) use ilícitamente un nombre comercial o cualquier signo similar a ese nombre susceptible de crear confusión, o
 - b) ponga en circulación productos ilícitamente marcados con una denominación de origen cuya titularidad exclusiva corresponda a otra persona, o con una denominación de origen similar susceptible de crear confusión.

Artículo 151 - Infracción de derechos de propiedad industrial

La persona que infrinja ilícitamente el derecho relativo a una invención, un dibujo o modelo industrial, un modelo de utilidad o una topografía de producto semiconductor protegidos será castigada con pena de prisión por un período no superior a tres años o una multa.

Artículo 152 - Infracción del derecho de autor

- 1) La persona que se beneficie ilícitamente de una obra protegida por el derecho de autor, de una interpretación o ejecución de un artista intérprete o ejecutante, de una grabación sonora o visual, de un programa de radiodifusión o de televisión protegido por un derecho similar al derecho de autor en cuanto a su pertenencia al autor, artista intérprete o ejecutante, productor de la grabación sonora o visual, organismo de radiodifusión o televisión u otro titular de ese derecho, o la persona que de alguna otra forma infrinja los derechos mencionados, serán castigadas con pena de prisión por un período no superior a dos años, con multa o con el decomiso del objeto.
- 2) El infractor será castigado con pena de prisión de seis meses a cinco años o con multa o decomiso del objeto si:
 - a) obtiene beneficios considerables mediante la acción expuesta en el párrafo 1, o
 - b) comete una infracción de gran alcance.

Cabe subrayar que es facultad discrecional del juez y, previamente, del fiscal determinar la intensidad de las acciones ilícitas que examinen y establecer de ese modo la existencia de un acto delictivo. En lo que respecta al artículo 150, la condición para su aplicación es el despacho de las mercancías a libre práctica o la prestación de un servicio con utilización ilícita directa de un signo protegido. En la República Eslovaca no se ha adquirido aún una experiencia que pueda servir para establecer pautas generales, sobre todo por parte del poder judicial.

Segunda parte

En todo caso, corresponde al demandante determinar el importe del daño. Si ese importe se justifica y prueba adecuada y fehacientemente, el tribunal tendrá motivos para pronunciarse sobre la demanda de indemnización por daños y perjuicios. En los casos en que el titular del derecho sufra pérdidas materiales que no tengan el carácter de daños y perjuicios desde el punto de vista jurídico, por no estar causadas por una acción ilegal, o en caso de que se produzcan pérdidas no materiales, el tribunal puede reconocer a la parte perjudicada el derecho al resarcimiento adecuado, incluso en forma de compensaciones pecuniarias. En tal caso, el juez fija discrecionalmente la cantidad de dinero por concepto de resarcimiento, que evidentemente se basa en la solicitud formulada y, aunque no se trata de un importe establecido objetivamente, sino determinado de forma discrecional, ha de tener una base racional.

Consideramos que la información expuesta responde a la pregunta sobre los eventuales gastos del titular del derecho que deberían pagarse según el párrafo 1 del artículo 45.

La parte ganadora o parcialmente ganadora de un pleito puede obtener el derecho al resarcimiento de las costas del procedimiento en la medida en que la sentencia le sea favorable. Esas costas se consideran aparte de los honorarios de asesoramiento jurídico, de los abogados y de otros honorarios cuyo pago demostrable y justificado guarde relación con la ejecución del derecho por vía judicial. El reembolso de los honorarios de los abogados se calcula objetivamente de acuerdo con las tarifas establecidas mediante el decreto del Ministerio de Justicia en que se determina la remuneración de los abogados por los distintos actos, en función de su naturaleza y su número y del importe de la reclamación.

En cuanto a la aplicación de la segunda frase del párrafo 2 del artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC, consideramos que se lleva a cabo en virtud el párrafo 3) del artículo 26 de la Ley de

Marcas de Fábrica o de Comercio N° 55/1997, que establece el derecho al resarcimiento por perjuicios o a la indemnización pertinente, que puede también consistir en una compensación pecuniaria con independencia de que el infractor haya violado los derechos del titular y causado, a sabiendas o no, perjuicios u otras pérdidas.

No obstante, es necesario añadir que la posibilidad de adoptar medidas de decomiso y secuestro en los procedimientos penales deja abierta la cuestión de la utilización posterior de las mercancías. Huelga decir que, si tales productos no pueden venderse, es lógico que se destruyan.

La suficiencia de las sanciones es una cuestión subjetiva. Comparadas con las pautas penales aplicadas a los delitos económicos, las sanciones establecidas y su ámbito de aplicación parecen suficientes tanto desde el punto de vista punitivo como preventivo.

56. En el artículo 61 se estipula asimismo que, cuando proceda, entre los recursos disponibles figurarán también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Sírvanse explicar las disposiciones de las leyes de la República Eslovaca en que se prescriben estas sanciones, describir las condiciones en que pueden imponerse y citar los textos legales pertinentes.

Véase la respuesta a la anterior pregunta 55.

57. En el artículo 61 se indica también que los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción dolosa de derechos de propiedad intelectual. Sírvanse describir toda disposición de las leyes de la República Eslovaca que prescriba dichos procedimientos y sanciones y citar los textos legales pertinentes.

Véase la respuesta a la anterior pregunta 55.

58. En el artículo 61 se estipula que las sanciones penales deben ser suficientes para tener efectos disuasorios al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor. Sírvanse explicar en qué forma las sanciones previstas en las leyes de la República Eslovaca cumplen con esta obligación.

Véase la respuesta a la anterior pregunta 55.

[Preguntas complementarias de los Estados Unidos]

1. Sírvanse facilitar información estadística sobre los procedimientos civiles de observancia en materia de derechos de autor, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados y secretos comerciales correspondientes a los distintos años 1996 y 1997 con especificación del número de demandas presentadas; mandamientos judiciales dictados; productos infractores confiscados; equipo infractor confiscado; casos resueltos (incluidos los arreglos extrajudiciales); y cuantía de las indemnizaciones por daños y perjuicios concedidas.

Caso	Año	Número definitivo de casos resueltos	Promedio de la duración de la acción en meses
Infracción del derecho de autor	1994	43	7,9
	1995	29	9,8
	1996	10	10,2
Otros casos relativos al derecho de autor	1994	140	8,0
	1995	93	8,1
	1996	28	12,3
Derechos de inventores	1994	7	17,1
	1995	4	21,0
	1996	9	19,7
Derechos relativos a propuestas de racionalización y a dibujos y modelos industriales	1994	41	19,3
	1995	38	21,1
	1996	15	21,9

2. Sírvanse facilitar información estadística sobre los procedimientos penales de observancia aplicados a los actos de piratería del derecho de autor e infracción de las marcas de fábrica o de comercio en los distintos años 1996 y 1997, con inclusión del número de casos de allanamiento, procesamiento y condena, y la cuantía de las multas o la duración de las penas de prisión (con independencia de que las multas se hayan pagado o no y las penas de prisión se hayan aplicado realmente o suspendido), así como cualquier otra información que demuestre que su sistema penal resulta eficaz en la disuasión de la piratería de obras protegidas por el derecho de autor y la falsificación de marcas de fábrica o de comercio.

Disposición aplicable	Número definitivo de personas condenadas		
	1994	1995	1996
Párrafo 2 del artículo 150 Nombres comerciales y denominaciones de origen	0	0	0
Artículo 151 Patentes y dibujos y modelos industriales	1	1	2
Artículo 152 Derecho de autor	22	28	25

3. Con respecto a la respuesta de la República Eslovaca a las preguntas 37 a 41 de los Estados Unidos, sírvanse exponer el calendario previsto por el Gobierno de la República Eslovaca para la adopción de la normativa a que se hace referencia en esas respuestas.

Se prevé que la preparación de la normativa especial sobre medidas en frontera relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual empiece en 1998, con el objetivo de finalizar el procedimiento legislativo y adoptar la ley correspondiente al año siguiente.

4. Con respecto a la respuesta de la República Eslovaca a la pregunta 20 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia⁴, sírvanse exponer el calendario previsto por el Gobierno de la República Eslovaca para la adopción del nuevo Código Penal a que se hace referencia en esa respuesta.

La recodificación del Código Penal se halla en la fase final del proceso legislativo, y se prevé que su adopción tendrá lugar antes de fines del presente año o en el primer semestre del año próximo a más tardar.

⁴Documento IP/N/6/SVK/1.

ANEXO

**TASAS ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
(EXTRACTO DE LA LEY N° 145/1995)**

Artículo 166

- | | | |
|----|---|----------|
| a) | Expedición de una copia, un extracto del Registro, un documento o un informe oficial, por cada página | 100 SK |
| b) | Presentación por un abogado o un consejero jurídico-comercial de una solicitud de reconocimiento de su capacidad profesional realización de un examen especializado por un solicitante para su admisión en el Registro de Agentes de Patentes | 1.500 SK |

Artículo 167

- | | | |
|----|--|----------|
| a) | Presentación de una solicitud para | |
| | 1. justificar el incumplimiento de un plazo | 1.000 SK |
| | 2. obtener un certificado del derecho de prioridad, por cada certificado | 200 SK |
| b) | Interposición de recurso contra una decisión de la Oficina de la Propiedad Industrial de la República Eslovaca (en adelante, la "Oficina") | 2.500 SK |

Nota

La tasa pagada con arreglo al apartado b) de este artículo se reembolsará en caso de que el recurso se resuelva favorablemente en todas sus partes.

INVENCIONES

Artículo 168

- | | | |
|-----|--|----------|
| a) | Presentación de una solicitud relativa a una invención | |
| 1. | exclusivamente por un autor | 800 SK |
| 2. | por otro solicitante | 1.600 SK |
| b) | Presentación de una solicitud de | |
| 1. | publicación de una solicitud relativa a una invención con anterioridad al plazo establecido por la ley | 600 SK |
| 2. | registro de la cesión o transferencia de una solicitud relativa a una invención a otro solicitante o de la cesión o transferencia de una patente a otro titular | 800 SK |
| 3. | registro de otro autor o solicitante respecto de una invención o de otro titular de una patente | 300 SK |
| 4. | registro de un cambio en el nombre, el apellido o la dirección, el nombre comercial, la denominación o el domicilio social de un solicitante o autor de una invención o del titular de una patente, por cada solicitud o patente | 200 SK |
| 5. | registro del cambio de representante de un solicitante de una invención o un titular de una patente | 200 SK |
| 6. | mantenimiento o cancelación del carácter secreto de una invención | 1.000 SK |
| 7. | inscripción de un contrato de licencia en el Registro, por cada patente | 200 SK |
| 8. | concesión de una licencia obligatoria para la explotación de una invención | 5.000 SK |
| 9. | conversión de un certificado de autor en una patente | 2.000 SK |
| 10. | inscripción de otros datos fundamentales en el Registro | 200 SK |
| c) | Presentación de una petición para que se realice el examen de fondo de una solicitud relativa a una invención | |
| 1. | hasta 10 reivindicaciones de derechos de patente | 2.500 SK |
| 2. | por cualquier otra reivindicación de derechos de patente | 400 SK |

- d) Expedición de certificados de patente
- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | de una extensión no superior a 10 páginas de texto dactilográfico o dibujo | 2.000 SK |
| 2. | por el registro de cualquier otra página de texto dactilográfico o dibujo | 200 SK |

Exención

Están exentas de la tasa establecida en el punto 2 del apartado b) de este artículo las solicitudes formuladas de acuerdo con la Ley N° 92/1991 sobre las condiciones de cesión de activos del Estado a otras personas, en su forma modificada.

Nota

La tasa establecida en el apartado d) de este artículo puede pagarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de entrega de la notificación pertinente de la Oficina. Si la información requerida para la expedición del Certificado de Patente se presenta en disquete de 3,5 pulgadas, en un formato preparado mediante los sistemas de tratamiento de texto T602, MS WORD, Win Text o Word Perfect, la tasa se reduce a 2/3 de su importe.

Artículo 169

- | | | |
|----|---|----------|
| a) | Presentación de una solicitud para determinar si una solución técnica puede ser objeto de patente | 5.000 SK |
| b) | Presentación de una solicitud de cancelación de una patente tras haber transcurrido un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la decisión de concesión de una patente | 1.000 SK |

Artículo 170

Mantenimiento de la validez de una patente

- | | | |
|-----|---|-----------|
| a) | por el período del tercer al quinto año | 5.000 SK |
| b) | por el sexto año | 1.700 SK |
| c) | por el séptimo año | 2.100 SK |
| d) | por el octavo año | 2.700 SK |
| e) | por el noveno año | 3.500 SK |
| f) | por el décimo año | 4.500 SK |
| g) | por el undécimo año | 5.500 SK |
| h) | por el duodécimo año | 6.500 SK |
| ch) | por el decimotercer año | 7.500 SK |
| i) | por el decimocuarto año | 8.500 SK |
| j) | por el decimoquinto año | 9.500 SK |
| k) | por el decimosexto año | 11.000 SK |
| l) | por el decimoséptimo año | 12.500 SK |
| m) | por el decimoctavo año | 14.000 SK |
| n) | por el decimonoveno año | 15.500 SK |
| o) | por el vigésimo año | 17.000 SK |

Notas

1. La tasa de mantenimiento correspondiente al período del tercer al quinto año se paga en la cuantía que establezca la ley en el momento de concederse la patente. En la decisión de concesión de la patente se especifica también la cuantía de la tasa. Las tasas de mantenimiento se pagan con arreglo a la cuantía establecida por la ley vigente en el momento del pago, sin que la Oficina haga propuestas. En caso de que el interesado pague por anticipado una tasa de mantenimiento correspondiente a un plazo y el período de pago de la tasa se inicie cuando esté ya en vigor una nueva ley, pagará la tasa establecida en las disposiciones de la nueva ley. Si el interesado paga la tasa durante los seis meses siguientes de acuerdo con el punto 4 de estas notas, se atenderá a la ley vigente en la fecha de vencimiento del anterior plazo de pago.
2.
 - a) La tasa de mantenimiento de una patente para el período del tercer al quinto año puede pagarse en el plazo máximo de tres meses desde que haya tenido efecto la decisión de conceder la patente.
 - b) La tasa correspondiente al sexto año y a cada uno de los siguientes años de validez de la patente puede pagarse antes de que finalice el año anterior de validez de la patente.
3. Si el período a que se hace referencia en el apartado b) del punto 2 expira antes de que tenga efecto la decisión de concesión de la patente, las tasas se pagarán en el período especificado en el apartado a) de ese punto.
4. Si la tasa no se paga dentro de los períodos especificados en los puntos 2 y 3, podrá pagarse dentro de los seis meses siguientes, pero en ese caso su importe será doble.
5. Si la patente está sujeta a una oferta de licencia, el titular pagará únicamente la mitad de la tasa de mantenimiento.

Artículo 171

Según el párrafo 1 del artículo 81 de la Ley N° 527/1990 sobre invenciones, dibujos y modelos industriales y propuestas de racionalización, el mantenimiento de la validez del certificado de autor está sujeto a las tasas mencionadas en el artículo 170.

Artículo 172

Actos de la Oficina relacionados con la presentación de una solicitud internacional
en el marco del Tratado sobre Cooperación en materia de Patentes

1.600 SK

MODELOS DE UTILIDAD

Artículo 173

- | | | |
|----|--|----------|
| a) | Presentación de una solicitud relativa a un modelo de utilidad | |
| 1. | exclusivamente por un autor | 700 SK |
| 2. | por otro solicitante | 1.400 SK |
| b) | Presentación de una solicitud de | |
| 1. | aplazamiento de la inscripción de un modelo de utilidad en el Registro | 500 SK |
| 2. | registro de la cesión o transferencia de una solicitud relativa a un modelo de utilidad a otro solicitante o de la cesión o transferencia de un modelo de utilidad a otro titular | 800 SK |
| 3. | registro de otro autor, solicitante o titular de un modelo de utilidad | 300 SK |
| 4. | registro de un cambio en el nombre, el apellido o la dirección, el nombre comercial, la denominación o el domicilio social de un solicitante, autor o titular de un modelo de utilidad, por cada solicitud o modelo de utilidad registrado | 200 SK |
| 5. | registro del cambio de representante del solicitante o del titular de un modelo de utilidad | 200 SK |
| 6. | inscripción de un contrato de licencia en el Registro, por cada modelo de utilidad | 200 SK |
| 7. | concesión de una licencia obligatoria para la explotación de un modelo de utilidad | 5.000 SK |
| 8. | inscripción de otros datos fundamentales en el Registro | 200 SK |

Exención

Están exentas de la tasa establecida en el punto 2 del apartado b) de este artículo las solicitudes formuladas de acuerdo con la Ley N° 92/1991 sobre las condiciones de cesión de activos del Estado a otras personas, en su forma modificada.

Artículo 174

- | | | |
|----|---|----------|
| a) | Presentación de una solicitud para determinar si una solución técnica puede registrarse como modelo de utilidad | 5.000 SK |
| b) | Presentación de una solicitud para la cancelación de un modelo de utilidad en el Registro | 500 SK |

- | | | |
|----|--|----------|
| c) | Procedimiento relativo a la cancelación de un modelo de utilidad | 2.500 SK |
|----|--|----------|

Nota

De acuerdo con el apartado c) de este artículo, se cobrará la tasa por el procedimiento relativo a la propuesta de cancelación, iniciado mediante una declaración del titular del modelo de utilidad. La tasa se paga una vez finalizado el procedimiento y corre por cuenta de la persona que no haya obtenido un resultado favorable en ese procedimiento. Si el resultado del procedimiento ha sido parcialmente favorable, la Oficina determina el grado en que los resultados han sido favorables a cada una de las partes.

Artículo 175

Presentación de una solicitud de prórroga del registro de un modelo de utilidad

- | | | |
|----|--------------------------------------|----------|
| a) | para un primer período de tres años | 3.000 SK |
| b) | para un segundo período de tres años | 6.000 SK |

Notas

1. Si el modelo de utilidad se ha inscrito en el Registro de modelos de utilidad tras haber expirado su validez, la tasa de prórroga podrá pagarse, sin que para ello se requiera una solicitud del titular, dentro de los dos meses siguientes a la expedición del certificado, previa invitación por escrito.
2. Si la tasa no se ha pagado dentro del período establecido, es posible pagarla dentro de los seis meses siguientes, pero en ese caso su importe es doble.

DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Artículo 176

- a) Presentación de una solicitud relativa a un dibujo o modelo industrial
1. exclusivamente por un autor
 - 1.1. por una presentación de un producto 600 SK
 - 1.2. por cualquier otra presentación de un producto comprendida en esa solicitud 100 SK
 2. por cualquier otro solicitante
 - 2.1. por una presentación de un producto 1.200 SK
 - 2.2. por cualquier otra presentación de un producto comprendida en esa solicitud 200 SK
- b) Presentación de una solicitud de
1. aplazamiento de la inscripción de un dibujo o modelo industrial en el Registro 500 SK
 2. registro de la cesión o transferencia de una solicitud relativa a un dibujo o modelo industrial a otro solicitante o de la cesión o transferencia de una patente a otro titular 600 SK
 3. registro de otro autor, solicitante o titular de un dibujo o modelo industrial 300 SK
 4. registro de un cambio en el nombre, el apellido o la dirección, el nombre comercial, la denominación o el domicilio social de un solicitante, autor o titular de un dibujo o modelo industrial, por cada solicitud o registro de dibujo o modelo industrial 200 SK
 5. registro del cambio de representante del solicitante o del titular de un dibujo o modelo industrial 200 SK
 6. mantenimiento o cancelación del carácter secreto de un dibujo o modelo industrial 1.000 SK
 7. inscripción de un contrato de licencia en el Registro, por cada dibujo o modelo industrial 200 SK
 8. inscripción de otros datos fundamentales en el Registro de dibujos o modelos industriales 200 SK

Exención

Están exentas de la tasa establecida en el punto 2 del apartado b) de este artículo las solicitudes formuladas de acuerdo con la Ley N° 92/1991 sobre las condiciones de cesión de activos del Estado a otras personas, en su forma modificada.

Artículo 177

- | | | |
|----|--|----------|
| a) | Presentación de una solicitud para determinar si una presentación de un producto puede registrarse como dibujo o modelo industrial | 3.000 SK |
| b) | Presentación de una solicitud de cancelación de un dibujo o modelo industrial en el Registro | |
| 1. | por una presentación de un producto | 600 SK |
| 2. | por cualquier otra presentación de un producto comprendida en un dibujo o modelo industrial | 100 SK |

Artículo 178

Presentación de una solicitud de prórroga del registro de un dibujo o modelo industrial

- | | | |
|----|---------------------------------------|----------|
| 1. | para un primer período de cinco años | 2.000 SK |
| 2. | para un segundo período de cinco años | 4.000 SK |

Notas

1. Si el dibujo o modelo industrial se ha inscrito en el Registro de dibujos o modelos industriales tras haber expirado su validez, la tasa de prórroga podrá pagarse, sin que para ello se requiera una solicitud del titular, dentro de los dos meses siguientes a la expedición del certificado, previa invitación por escrito.
2. Si la tasa no se ha pagado dentro del período establecido, es posible pagarla dentro de los seis meses siguientes, pero en ese caso su importe es doble.

TOPOGRAFÍAS DE PRODUCTOS SEMICONDUCTORES

Artículo 179

- | | | |
|----|---|----------|
| a) | Presentación de una solicitud relativa a una topografía de producto semiconductor | 5.000 SK |
| b) | Presentación de una solicitud de | |
| 1. | registro de la cesión o transferencia de una solicitud relativa a una topografía de producto semiconductor a otro solicitante o de la cesión o transferencia de una topografía de producto semiconductor a otro titular | 600 SK |
| 2. | registro de un cambio en el nombre, el apellido o la dirección, el nombre comercial, la denominación o el domicilio social de un solicitante, autor o titular de una topografía de producto semiconductor, por cada solicitud o topografía de producto semiconductor registrada | 200 SK |
| 3. | registro del cambio de representante del solicitante o del titular de una topografía de producto semiconductor | 200 SK |
| 4. | inscripción de un contrato de licencia en el Registro, por cada topografía de producto semiconductor | 200 SK |
| 5. | concesión de una licencia obligatoria para la explotación de una topografía de producto semiconductor | 5.000 SK |
| 6. | inscripción de otros datos fundamentales en el Registro de topografías de productos semiconductores | 200 SK |

Exención

Están exentas de la tasa establecida en el punto 1 del apartado b) de este artículo las solicitudes formuladas de acuerdo con la Ley N° 92/1991 sobre las condiciones de cesión de activos del Estado a otras personas, en su forma modificada.

Artículo 180

Presentación de una solicitud para la cancelación de la inscripción de una topografía en el Registro de topografías de productos semiconductores	4.000 SK
--	----------

MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

Artículo 181

- a) Presentación de una solicitud relativa a
1. una marca de fábrica o de comercio individual, hasta tres clases de productos y servicios 3.000 SK
 2. una marca colectiva, hasta tres clases de productos y servicios 5.000 SK
 3. una marca individual o colectiva, por cada clase de productos y servicios, a partir de la tercera clase 300 SK
- b) Presentación de una solicitud de
1. registro de la cesión o transferencia de una marca de fábrica o de comercio a otro solicitante o de la cesión o transferencia de un derecho relativo a una marca de fábrica o de comercio a otro titular 600 SK
 2. declaración del carácter de marca famosa 20.000 SK
 3. registro de cambios en el nombre, el apellido o la dirección, el nombre comercial, la denominación o el domicilio social del solicitante o del titular de una marca de fábrica o de comercio, por cada solicitud o marca registrada 200 SK
 4. registro del cambio de representante de un solicitante o un titular de una marca 200 SK
 5. inscripción de un contrato de licencia en el Registro de marcas de fábrica o de comercio 500 SK
 6. registro de la restricción de la lista de productos y servicios, la introducción de cambios en un contrato de licencia relativo a la solicitud o la utilización de una marca colectiva, y la modificación de una marca de fábrica o de comercio 500 SK
 7. inscripción de otros datos fundamentales en el Registro de marcas de fábrica o de comercio 200 SK

Exención

Están exentas de la tasa establecida en el punto 1 del apartado b) de este artículo las solicitudes formuladas de acuerdo con la Ley N° 92/1991 sobre las condiciones de cesión de activos del Estado a otras personas, en su forma modificada.

Artículo 182

- a) Presentación de una solicitud para cancelar la inscripción de una marca de fábrica o de comercio en el Registro 600 SK

- | | | |
|----|---|--------|
| b) | Presentación de una oposición a la inscripción de una marca en el Registro de marcas de fábrica o de comercio | 500 SK |
|----|---|--------|

Artículo 183

Presentación de una solicitud de

- | | | |
|----|--|----------|
| a) | renovación del registro de una marca de fábrica o de comercio individual | 2.500 SK |
| b) | renovación del registro de una marca de fábrica o de comercio colectiva | 3.000 SK |
| c) | renovación del registro de una marca de fábrica o de comercio individual, depositada tras haber expirado la duración de la protección (dentro de los seis meses siguientes a esa fecha a más tardar) | 3.500 SK |
| d) | renovación del registro de una marca de fábrica o de comercio colectiva, depositada tras haber expirado la duración de la protección (dentro de los seis meses siguientes a esa fecha a más tardar) | 4.000 SK |

Artículo 184

Presentación de una solicitud de

- | | | |
|----|--|----------|
| a) | registro internacional de una marca de fábrica o de comercio | 1.500 SK |
| b) | renovación del registro internacional de una marca de fábrica o de comercio | 1.500 SK |
| c) | ampliación o restricción territoriales del registro internacional de una marca de fábrica o de comercio | 800 SK |
| d) | restricción de la lista de productos y servicios a que se refiere la marca de fábrica o de comercio internacionalmente registrada, registro de la cesión o transferencia de una marca de fábrica o de comercio internacionalmente registrada, registro de cambios en el nombre, el apellido o la dirección, el nombre comercial, la denominación o el domicilio social del titular de una marca de fábrica o de comercio internacionalmente registrada | 500 SK |

DENOMINACIONES DE ORIGEN

Artículo 185

- | | | |
|----|---|----------|
| a) | Presentación de una solicitud relativa a una denominación de origen | 2.000 SK |
| b) | Presentación de una solicitud de | |
| 1. | registro de otro usuario de una denominación de origen | 2.000 SK |
| 2. | registro de la cesión o la transferencia de una denominación de origen registrada a otro usuario | 600 SK |
| 3. | registro de cambios en el nombre, el apellido o el lugar de residencia, el nombre comercial, la denominación o el domicilio social de un solicitante o un usuario de una denominación de origen | 100 SK |
| 4. | registro del cambio de representante de un solicitante o un usuario de una denominación de origen | 200 SK |
| 5. | inscripción de otros datos fundamentales en el Registro de denominaciones de origen | 200 SK |

Exención

Están exentas de la tasa establecida en el punto 2 del apartado b) de este artículo las solicitudes formuladas de acuerdo con la Ley N° 92/1991 sobre las condiciones de cesión de activos del Estado a otras personas, en su forma modificada.

Artículo 186

Presentación de una solicitud de cancelación del registro de una denominación de origen	2.000 SK
---	----------

Artículo 187

Presentación de una solicitud de registro internacional de una denominación de origen	1.000 SK
---	----------
